

DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA

LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS CON EFECTOS RESTITUTORIOS.
NUEVA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 22/2023 (11A.)

ANÁLISIS JURÍDICO

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS

CUEJ M.R.

PARA ESPECIALISTAS, ENTRE ESPECIALISTAS

**LICENCIA PARA PERSONAS
MENSTRUANTES EN MÉXICO**

Mtra. Dafne Rosales Rodríguez
Mtro. Enrique Bautista Paz

**CONVOCATORIA PARA OBTENER PATENTE DE
AGENTE ADUANAL**

Dr. Dante Jehová Cisneros García

**ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL CAPÍTULO SOBRE LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MARCO DEL T-MEC**

Dr. Hadar Moreno Valdez
Mtra. Amara A. Lizárraga Moguel



MTRO. ENRIQUE BAUTISTA PAZ
Docente experto en materia laboral

@RevistaCUEJ /CUEJREVISTA
www.revistacuej.com.mx

JULIO - SEPTIEMBRE 2023

\$ 120.00

026



042016112313103600102



"Lo que
hacemos juntos
es lo que
nos distingue"

CONOCE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

LICENCIATURA

LICENCIATURA EN DERECHO
RVOE: 20211348

ECEX

TRÁFICO DE MERCANCÍAS
Y TRAMITACIÓN ADUANAL
18FT234 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018

MAESTRÍAS

MAESTRÍA EN SISTEMA ACUSATORIO
Y JUICIOS PENALES ORALES
RVOE: 20150061

MAESTRÍA EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR
RVOE: 20150103

MAESTRÍA DERECHO CIVIL
Y FAMILIAR
RVOE: 20181226

MAESTRÍA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL
RVOE: 20150104

MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL
Y ADMINISTRATIVO
RVOE: 20121644

DOCTORADOS

DOCTORADO EN DERECHO
RVOE: 20130002

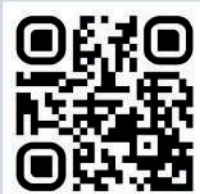
DOCTORADO EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR
RVOE: 20192323

DIPLOMADOS EN LÍNEA

DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO
DIPLOMADO EN ISR PERSONAS FÍSICAS
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y
AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DIPLOMADO EN JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL Y RECURSO
DE REVOCACIÓN

CERTIFICACIÓN

EXAMEN ÚNICO DE BACHILLERATO
EXAMEN ÚNICO DE SECUNDARIA



CAMPUS | BAJA CALIFORNIA
(664) 200 2770
(664) 684 2303

CAMPUS | VERACRUZ
229 3753 434
229 37 52 431

CAMPUS CENTRAL | CDMX
555575 9840
555672 2020

WhatsApp
55 1081 5944 - 55 8202 9064 - 55 3964 7158 - 56 2669 6344 - 55 8202 5967

Contenido

- 05** **LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS CON EFECTOS RESTITUTORIOS. NUEVA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 22/2023 (11A.)**
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
- 10** **LO QUE DEBES CONOCER DE LA CARTA PORTE**
Dr. Miguel García Vázquez
- 12** **LA LICENCIA POR CUIDADOS MÉDICOS**
Mtra. Thelma Elizabeth Merino González
- 16** **MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTE DELITOS DE FUERO FEDERAL (NARCOMENUDEO)**
Ximena Anahi Nolasco Arreola
- 19** **PRESCRIPCIÓN. CONSECUENCIAS FISCALES EN PERSONAS FÍSICAS**
L.C. E.F. Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado
- 22** **VENTANILLA ÚNICA MARÍTIMA**
Mtro. Cap. Alt. Rodolfo Rey Ali Rivera Hernández
- 25** **ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL CAPÍTULO SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MARCO DEL T-MEC**
Dr. Hadar Moreno Valdez
Mtra. Amara A. Lizárraga Moguel
- 29** **LA ILICITUD PROBATORIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO**
Mtro. Alberto Azael B. Roldán
- 33** **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO. RETOS A CORTO Y LARGO PLAZO**
Dr. Víctor Amaury Simental Franco
- 35** **LOS RÉGIMENES ADUANEROS EN EL INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR**
Dr. Zenén Miguel Cruz
- 41** **LAS FAMILIAS MULTIESPECIE O INTERESPECIE EN EL MARCO JURÍDICO ACTUAL DEL DERECHO FAMILIAR MEXICANO Y SU EVOLUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL**
Lic. Berenice Álvarez López
- 44** **LA DIALÉCTICA EN PLATÓN**
S. Sofia Cisneros Grosso
- 48** **CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR**
Dra. Wendy Aide Godínez Méndez
Dr. Lawrence Salomé Flores Ayvar
- 53** **LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA EN EL PENSAMIENTO DE NICOLÁS MAQUIAVELO**
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina
- 56** **EL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL PROCESO LABORAL BUROCRÁTICO**
Dr. Magdaleno Villanueva Flores
- 62** **¿PUEDEN SER LOS ROBOTS UNA PERSONA JURÍDICA?**
Dr. Carlos Ortega-Laurel
- 65** **CONVOCATORIA PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL**
Dr. Dante Jehová Cisneros García
- 69** **LICENCIA PARA PERSONAS MENSTRUANTES EN MÉXICO**
Mtra. Dafne Rosales Rodríguez
Mtro. Enrique Bautista Paz

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

DIRECTOR DEL CONSEJO EDITORIAL

Dr. Dante Jehová Cisneros García

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Hadar Moreno Valdéz

Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Dra. Sara Esteban Cabrera

EDICIÓN Y ARTE

COORDINADORA DE ARTE

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO

Lic. Liliana Andrade Gutiérrez

CORRECTORA DE ESTILO

Sandra Sofía Cisneros Grosso



Adquiere tu **Libro** Editorial CUEJ



Manual para la elaboración de tesis
Dr. José Manuel Vargas Menchaca



Enseñanza del Derecho
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo
Dra. Sara Esteban Cabrera



Valoración Aduanera
Dr. Balam Lammogila Riquelme



Personas
Dr. Miguel Ángel Flores Palma



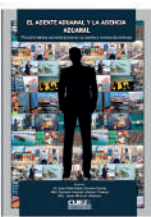
Historia del Derecho en México
Dra. María Elena Ayala Ensuaustegui



Derecho Penal, Parte General
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco
Mtra. Ana Karen Viviana Orozco Calvo



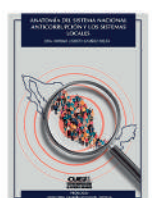
Argumentación Jurídica Práctica
Dr. Sergio Bazán Ortega



El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal
Dr. Juan Rabinodrana Cisneros García
Mtro. Gustavo Armando Jiménez Pereyra
Mtro. Javier Miranda Villalobos



Derechos Humanos
Coordinador: Dr. Víctor Amaury Simmental Franco.
Varios autores.



Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía



Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa
Dr. Juan Rabinodrana Cisneros García
Mtro. José Antonio García Ochoa



Teoría General del Estado
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Derecho Procesal Fiscal y Aduanero
Dr. Juan Rabinodrana Cisneros García
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina



T-MEC
Comentado: Tomo 1, 2 y 3



Derecho Fiscal Internacional: Tomo 1 y 2
Dr. Hader Moreno Valdez



Logística Funcional del Comercio Internacional
Mtro. Héctor Díaz Arzola



Manual Práctico de Clasificación Arancelaria
Dr. Carlos Muñoz Villavicencio



Compliance Aduanero Mexicano (Tomo 1 y 2)
Dr. Ricardo Méndez Castro



Nuevo Modelo Policial
Mtra. Sandra Regina Hernández Zetina



Derecho Fiscal Mexicano (Tomo 1 y 2)
Dr. Miguel García Vázquez



Nuevo Derecho Ambiental Mexicano
Dr. Víctor Amaury Simmental Franco



Reglas Generales de Comercio Exterior
Varios autores.



Recinto fiscalizado estratégico
Mtro. Carla Alejandra Guerrero García

Contamos con más de 25 libros
para su análisis jurídico

EDITORIAL

En esta ocasión tenemos la grata oportunidad de presentar la tercera edición del año 2023 de la Revista CUEJ, la cual corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre. Ya hemos llegado a la mitad del año y con ello, viendo en retrospectiva a los meses anteriores, nos alegra lo mucho que han avanzado los proyectos editoriales y educativos de este Centro Universitario, así como los proyectos venideros, entre otros, el Segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado que tendrá lugar los días 24 y 25 de julio en la ciudad de Múnich, Alemania. Todos éstos nos motivan a seguir ejerciendo nuestra labor con esfuerzo y dedicación.

En el presente número, el lector encontrará diversos textos que estudiosos y expertos nos comparten a modo de divulgación de la Ciencia del Derecho, en ramas como Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, Derecho Laboral, Penal, Fiscal, etc., así como temas de Bioética, Filosofía e Inteligencia Artificial estrechamente relacionados con la disciplina jurídica. Los tópicos que se encuentran plasmados en los siguientes artículos corresponden principalmente a fenómenos contemporáneos y a reflexiones sociales y culturales que, estamos seguros, propiciarán al pensamiento crítico y al diálogo.

Agradecemos a los colaboradores de la Revista CUEJ por sus valiosas contribuciones y, asimismo, felicitamos por su reciente cumpleaños al Director de este Centro Universitario, el Dr. Dante Jehová Cisneros García. Invitamos a los lectores a consultar su obra *Importando a México y Exportando al Mundo* del sello editorial CUEJ, en donde se plasman los años de experiencia en materia aduanera de este distinguido especialista. De igual manera, se invita a consultar los nuevos libros publicados en la editorial.

Finalmente, esperamos que los presentes artículos sean de agrado e interés para el lector.

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ)
Ciudad de México, julio de 2023.



REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR

con comentarios, videos y materiales
descargables.

2023

Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com

LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS CON EFECTOS RESTITUTORIOS. NUEVA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 22/2023 (11A.)



Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Doctor en Derecho; Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ); profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho; abogado litigante en materia aduanera desde hace 30 años. Autor de los libros: *Derecho Aduanero Mexicano* (Porrúa), *Procesos y Procedimientos Fiscales y Aduaneros* (Editorial CUEJ), *Manual práctico de amparo indirecto vs el embargo de mercancías* (CENCOMEX); coautor de *Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa* (Editorial CUEJ), *Derecho Procesal Fiscal y Aduanero* (TAX Editores), *El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal* (Editorial CUEJ) y *El Sistema Nacional Anticorrupción* (TAX Editores). Coordinador del libro: *T-MEC Comentado* (3 tomos) (Editorial CUEJ). Fue servidor público de la Administración General de Aduanas en 4 ocasiones, donde se desempeñó como Subadministrador, Administrador y encargado de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. Reconocido por la *Revista Estrategia Aduanera* como uno de los principales asesores de comercio exterior en los años 2017 a 2023. Presidente del Colegio de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Ha impartido diversas conferencias internacionales en Viña del Mar, Chile, Madrid, España y Quetzaltenango, Guatemala.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los quejosos y los abogados que litigamos amparo es la disparidad de criterios y la tardanza de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el dictado de las sentencias. Como ejemplo de ello: del mes de junio de 2022 a junio de 2023 promovimos 70 amparos contra el mismo acto reclamado (omisión de la autoridad aduanera de emitir la convocatoria para obtener la patente de agente aduanal) y los mismos conceptos de impugnación; lo único que variaba era el nombre del quejoso y la descripción de algunos hechos, pero las demandas eran prácticamente idénticas.

No obstante ello, 3 juzgados diferentes nos desecharon 3 demandas por considerar que eran “notoriamente improcedentes”, pero las restantes 67 demandas no sólo fueron procedentes, sino que 64 concedieron la sentencia de amparo y 3 negaron el amparo. En contra de esas sentencias constitucionales, tanto los quejosos como la autoridad promovieron recursos de revisión. La mayoría de los Tribunales Colegiados de Circuito confirmaron las sentencias que concedían el amparo, pero en 3 asuntos dos Tribunales Colegiados revocaron la sentencia y

tuvieron criterios completamente diferentes al de los demás colegiados. Los que tuvieron la “mala suerte” de que los jueces y tribunales que negaron el amparo conocieran de sus demandas, se enfrentaron a la realidad de la disparidad de criterios de esos órganos jurisdiccionales y al poco compromiso de esos jueces para garantizar los derechos humanos de los amparistas, a pesar de ser muy clara la violación constitucional alegada.

Hablando con varios colegas litigantes, hemos llegado a la conclusión de que a veces obtener una sentencia favorable sí es cuestión de conocimiento y experiencia, pero la mitad del amparo depende de la suerte de que sea resuelto por un buen juez o tribunal colegiado. Pero, a pesar de poder obtener una sentencia favorable, el problema muchas veces es el tiempo que transcurre desde la presentación de la demanda hasta el día en que se dicta la sentencia ejecutoria. Como dice el principio general de derecho “justicia lenta no es justicia”. Y, en otras ocasiones, a pesar de pasar por todo este viacrucis, la sentencia no se puede ejecutar o dura años en que esto suceda.

Es aquí donde siempre he considerado que sería muy bueno implementar en algunas materias (como la materia aduanera donde todo urge e, incluso hay obligación internacional de garantizar la agilidad y facilitación aduanera) juicios de amparo orales, en donde la audiencia sea oral y en la misma se decida si se concede o no el amparo y protección de la Justicia Federal.

Pero mientras no suceda lo anterior, considero muy importante hacer referencia a la tesis de jurisprudencia que a continuación transcribo, por ampliar más la posibilidad de los justiciables de poder obtener la suspensión del acto reclamado contra actos inconstitucionales de las autoridades responsables. Así, el acceso a la justicia puede ser más ágil y efectiva. Esta tesis indica:

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2026730
Instancia: Segunda Sala
Undécima Época
Materias(s): Común
Tesis: 2a./J. 22/2023 (IIa.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a el quejoso del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a el quejoso, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a el quejoso coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión.

Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a el quejoso, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorio-

ríos verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo.

SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 338/2022. (...)

El efecto restitutorio de la suspensión es sumamente útil, porque el quejoso no debe de esperar hasta que la autoridad dicte sentencia y esta sea conformada por el Tribunal Colegiado para que se pueda restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (si el acto de autoridad fuera positivo) y la de “obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija” (si el acto fuera negativo u omisivo), tal y como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo.

De esta forma no hay que esperar hasta que la sentencia cause ejecutoria para que el quejoso pueda ser restituido de manera definitiva, sino que es a través de la suspensión del acto reclamado que ahora los jueces pueden restituir al quejoso en el goce de la garantía violada.

Ya desde la emisión de la Ley de Amparo en el año 2013, el artículo 147 de la citada Ley concede a los jueces de distrito el conceder el amparo con efectos restitutorios provisionales; también han existido tesis, como las referentes a la suspensión en caso de devolución de la licencia de conducir, a las clausuras, el embargo de cuentas de banco, de expropiaciones y otras tesis, que han venido a ayudar a conseguir suspensiones con dichos efectos restitutorios provisionales.

Desde mi experiencia como abogado que promueve amparo en materia aduanera he visto la conveniencia de que algunos jueces de distrito (no todos a decir verdad) conceden la suspensión definitiva para que los quejosos que hayan sufrido un embargo precautorio de mercancías puedan recuperarlas previa garantía del interés fiscal, aplicando el artículo 135 de la Ley de Amparo. Así, el quejoso recupera en un plazo razonable las mercancías, que sólo a él le sirven, y la autoridad queda protegida en cuanto al interés fiscal que presuntamente está siendo lesionado, evitando, además, que las mercancías no queden obsoletas o se echen a perder (si son perecederos).

Este tipo de juicios, en donde pude recuperar mercancías embargadas, fue lo que me inspiró a escribir el

libro *Manual práctico de amparo vs. El embargo precautorio de las mercancías* (CENCOMEX, 2018) mismo que se agotó a sólo unos cuantos meses de su publicación y que ahora se transformó en el libro *Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa* (2ª edición, Editorial CUEJ, 2022) en donde se ponen a disposición del lector formularios y videos para poder formular este tipo de demandas de amparo.

Pero la jurisprudencia también avanzó en los tiempos de la pandemia, cuando algunos juzgados de distrito empezaron a conceder suspensiones de plano y suspensiones definitivas contra actos omisivos, lo que antes era impensable que sucediera. Los amparos promovidos contra “la omisión de proporcionar medicinas”, “la omisión de vacunar al impetrante de amparo”, “la omisión de otorgar atención médica”, hizo un cambio muy importante en la manera de ver las suspensiones contra actos de naturaleza omisiva. Más también existen actos de naturaleza negativa (cuando la autoridad te niega algo que solicitaste), en donde esa negativa puede tener efectos positivos, que también permiten paralizar el acto reclamado.

De esta manera, festejamos la emisión de la jurisprudencia antes transcrita, debido a que permite conceder la suspensión aun cuando aparentemente deje sin materia el juicio de amparo, o coincida con los efectos de la sentencia de amparo, ya que, como indica la jurisprudencia:

“ La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. ”

Entonces, si la suspensión concedida con efectos restitutorios puede revocarse al momento de dictarse la ejecutoria del Tribunal Colegiado que niegue el amparo, se considera que sí puede ser concedida dicha suspensión. Ahora esperemos que los Juzgados de Distrito efectivamente apliquen esta tesis en beneficio de los quejosos, pues, hasta ahora, quienes han respetado este derecho han sido algunos tribunales colegiados de circuito que han revocado los acuerdos de los juzgados de distrito que niegan la

suspensión provisional, para ahora, mediante la resolución del recurso de queja, concederla con efectos restitutorios.

Otro ejemplo es el caso de la Convocatoria para obtener la patente de agente aduanal, publicada el 22 de junio de 2023, en donde la autoridad otorgó un plazo de 5 días a los aspirantes para registrarse en la misma, utilizando una página de internet de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que tuvo fallas. El registro causó mucha inconformidad porque la mayoría de los aspirantes no se pudieron registrar y, los que sí pudieron hacerlo la autoridad dejó sin efectos dicho registro mediante “Acuerdo” publicado el 3 de julio de 2023. Esto dio la oportunidad de plantear nuevos amparos solicitando la suspensión del acto reclamado para dos diferentes efectos:

- A)** Para los que no obtuvieron el registro, para que pudieran registrarse.
- B)** Para los que sí lo obtuvieron, para el efecto de que se conserve su registro y no quede sin efectos.

Como se puede apreciar, en ambos casos se solicitó la suspensión con efectos restitutorios.

Se promovieron 20 demandas de amparo en este sentido, de las cuales 5 fueron desechadas por ser “notoriamente improcedentes”, pero las 15 restantes sí fueron consideradas procedentes, y todos los jueces de distrito negaron la suspensión con diferentes argumentos que no respetaron la jurisprudencia antes descrita (a pesar de habérselas transcrito en la demanda). Pero, a la fecha de redacción de este artículo, 3 tribunales colegiados sí revocaron el acuerdo recurrido, y concedieron la suspensión provisional con efectos restitutorios (1 para conservar el registro y 2 para que los inscriban en la convocatoria), las restantes están en proceso de estudio y resolución.

De esta forma, acreditamos dos cosas: a) que no existe unificación de criterios entre los diferentes órganos jurisdiccionales; b) que sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando se respeta el artículo 147 de la Ley de Amparo y la anterior jurisprudencia.

Esperemos que exista una verdadera reforma judicial en donde el eje central sea el verdadero acceso a la

justicia, su accesibilidad para la población en general y un juicio de amparo más ágil, que garantice verdaderamente los derechos humanos y que, además, sí se pueda ejecutar de manera efectiva. Hace poco decía una juez de distrito “no es difícil conseguir la sentencia de amparo, lo más difícil es ejecutarla”. No podemos seguir así, los mexicanos requerimos de una mejor justicia.

Felicitemos a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta tesis de jurisprudencia, ahora esperemos que sí sea respetada por los jueces y magistrados del país.



DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA
DR. CARLOS JAVIER VERDUZCO REINA



DERECHO PROCESAL FISCAL Y ADUANERO

RECURSO DE REVOCACIÓN Y JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL

Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com



LO QUE DEBES CONOCER DE LA CARTA PORTE

Dr. Miguel García Vázquez

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho (UNAM). Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y Doctor en Derecho, ambos por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Diplomado en "Impuestos sistematizados" (ITAM), diversos cursos y talleres de actualización ISR, IVA, IEPS y CFF (SHCP y SAT), actualmente labora en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

El artículo 2º de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-transporte Federal dispone que se entenderá por:

Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen.

Por su parte, el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación dispone que en el momento de la contratación del servicio correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios **carta de porte**, conocimiento de embarque, boleto, factura o documento similar que contenga las condiciones en que se prestará el servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos.

De ahí que la carta porte resulte un documento muy importante no solamente para efectos fiscales, sino que también conlleva la protección legal en caso de algún siniestro que pueda sufrir las mercancías o productos transportados por el porteador (persona física o moral que se obliga, mediante una remuneración, a conducir y entregar por tierra, por agua o por aire, en el lugar convenido, las mercancías que le han sido confiadas para su transporte), sirve como prueba para el pago de algún seguro que se hubiese contratado.

Asimismo, el artículo 74 del Reglamento de Auto-transporte Federal y Servicios Auxiliares dispone que

los auto transportistas deberán emitir por cada embarque una **carta de porte** debidamente documentada, que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente:

- I. Denominación social o nombre del auto transportista y del expedidor y sus domicilios;
- II. Nombre y domicilio del destinatario;
- III. Designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y, en su caso, el valor declarado de los mismos;
- IV. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo;
- V. Fecha en que se efectúa la expedición;
- VI. Lugar de recepción de la mercancía por el auto transportista, y
- VII. Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega al destinatario.

La carta porte la pueden utilizar aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o mercan-

cías en territorio nacional, por alguna de las siguientes vías: terrestre, marítima, aérea y ferroviaria.

Para efectos fiscales, el uso obligatorio del complemento Carta Porte inicia a partir del 01 de enero de 2022, para todas las personas físicas y morales que transporten bienes y/o mercancías en territorio nacional, incluso a través de sus propios medios.

Las personas sujetas a utilizar el CFDI con complemento Carta Porte podrán utilizar la versión 2.0 de dicho complemento en los CFDI que emitan a partir del 01 de diciembre de 2021.

Los principales beneficios de emitir la Carta Porte son:

- Acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes o mercancías durante el traslado en territorio nacional, así como identificar el origen y destino de las mismas.
- Al emitir un CFDI de Ingreso, permite identificar los montos de la retención de IVA que se efectúan por concepto de servicios de autotransporte.

El CFDI tipo de Ingreso es un documento fiscal digital, que se emite por la prestación de servicios de autotransporte y, tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte. Asimismo, en el CFDI se debe desglosar el traslado y, en caso de que el receptor sea persona moral debe efectuar la retención del IVA.

Recuerda que si te dedicas a la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancías, debes estar dado de alta en el RFC y contar con el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El realizar el traslado de bienes o mercancías con el complemento Carta Porte acredita la legal tenencia mediante su representación impresa o el archivo digital correspondiente.

Emitir un CFDI de tipo Traslado con complemento Carta Porte informa los bienes o mercancías a transportar, ubicaciones de origen, puntos intermedios y

destinos, propietarias o propietarios, arrendatarias o arrendatarios y operadoras u operadores, así como los datos del autotransporte.

Por lo anterior, al emitir el complemento Carta Porte, más que una obligación fiscal, en mi opinión, considero que resulta de suma importancia porque salvaguarda la seguridad jurídica de las partes contratantes en el servicio de autotransporte.

Para mayor información puedes consultar la página del SAT http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm

Revise los códigos QR para tener acceso a los formatos.





LA LICENCIA POR CUIDADOS MÉDICOS

Mtra. Thelma Elizabeth Merino González

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM titulada con mención honorífica; cursó la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y el Doctorado en Derecho en el CUEJ. Trabajó en un Juzgado Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y actualmente labora en el Servicio de Administración Tributaria en el área de recaudación, donde es funcionario fiscal de carrera. Ha impartido clases en instituciones privadas de las materias Administración Pública, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Fiscal, Práctica Forense de Derecho Civil y Apología del Derecho Procesal.

El pasado 25 de abril de 2018, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura del Senado de la República presentaron el dictamen de una propuesta de reforma a las Leyes del Seguro Social (LSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) y de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incluir la **licencia por cuidados médicos**, con la que se pretendió armonizar algunos de los derechos previstos en los Artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹, basados en la investigación realizada por una asociación civil, estadísticas sobre el cáncer infantil en México² y las buenas prácticas del extranjero, particularmente de España y Chile, este último por la conocida Ley Sanna.³ Finalmente el Decreto respectivo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.⁴

OBJETO DE LA LICENCIA POR CUIDADOS MÉDICOS

Los artículos adicionados 140 Bis de la LSS⁵ y 37 Bis de la LISSSTE⁶ establecieron que las madres o padres trabaja-

dores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años fueran diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos, lo que les permitirá ausentarse de sus labores en caso de que su hijo requiera descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.

Este beneficio permitirá a la madre o al padre autorizado ausentarse de sus labores hasta por un máximo de 364 días en un periodo de 3 años, mediante licencias de 1 y hasta 28 días cada una. Adicionalmente, el padre o madre autorizado podrá acceder a un subsidio equivalente al 60% de su último salario diario de cotización registrado por el patrón -y que será cubierto por los institutos de seguridad social-, siempre que cuente con un mínimo de 30 cotizaciones semanales en los 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico por los servicios médicos institucionales y, en caso de no

¹ "Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez (...)." "Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Versión electrónica consultada en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>.

² Cfr. DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIV/041_DOF_04jun19.pdf.

³ Seguro para el Acompañamiento de niños y niñas. Visto en: <http://www.suseso.cl/612/w3-article-497936.html>.

⁴ Visto en Diario Oficial de la Federación, en <http://www.dof.gob.mx>.

⁵ Ley del Seguro Social. Versión electrónica en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>.

⁶ Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Versión electrónica. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>.

cumplir con este periodo, si tienen al menos 52 semanas de cotización inmediatas previas al inicio de la licencia. Lo anterior, siempre y cuando el padre o madre trabajadores lo soliciten a su patrón, quien sólo la otorgará si el ascendiente ejerce la patria potestad y tiene la guarda y custodia del menor.

Por último, se previó que la licencia cesará si el menor ya no requiere hospitalización o reposo médico en los periodos críticos del tratamiento, si fallece, si cumple 16 años, o si el ascendiente que goza de la licencia es contratado por un nuevo patrón.

Con respecto a la LFT se adicionó la fracción IX al artículo 42⁷ para sumar la licencia prevista en el artículo 140 Bis de la LSS como causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón.

BREVE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA LICENCIA

Como se puede advertir, esta figura comprende varios elementos para su efectividad: que el niño tenga menos de 16 años, que se le diagnostique cualquier tipo de cáncer, autorización a uno solo de los padres para ausentarse del trabajo y, adicionalmente para obtener un subsidio del 60% del sueldo se requiere un tiempo determinado de cotizaciones.

Sin embargo, a la luz de la legislación nacional -que desde luego incluye la convencional-, así como de la información pública y estadística disponible, es posible analizar si la licencia establecida es adecuada, qué resultados se han obtenido y si es necesario ampliar su objeto.

El primer elemento que salta a la vista es el relativo a la edad, **menos de 16 años**, pero ¿por qué esa edad? ¿Qué elementos se tomaron en cuenta para establecer 16 años? La exposición de motivos no lo justifica, no obstante que la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes indica en su artículo 5 que los niños son aquellos

que tienen menos de 12 años y que los adolescentes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18; también precisa que, para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, **son considerados niños los menores de 18 años**.⁸ Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño⁹ señala en su primer artículo que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, esto es, entre los 10 y los 19 años.¹⁰

Con base en lo anterior, si son adolescentes aquellos que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18, es claro que quienes tienen 16 y menos de 18 años son adolescentes y, por lo tanto, también debieron quedar cubiertos por el manto protector del interés superior de la niñez¹¹ en razón de que la citada Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes dispone en su artículo 2 que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa. Sin embargo, el legislador decidió excluirlos de la novedosa licencia sin ninguna explicación.

El siguiente elemento es el diagnóstico de cáncer de cualquier tipo. En el proyecto se aseveró, con cifras al año 2015, que el cáncer infantil era la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años con prevalencia de 23,000 casos anuales en el país, considerándolo así como el padecimiento que mayor atención requiere por parte de los padres y el mayor generador de ausentismo laboral.

No obstante, de la consulta a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la mortalidad general en México desde el año 1990 y hasta el 2021¹², y datos del Instituto Mexicano de Salud Pública (INSP)¹³, nos permiten afirmar que el cáncer no es la causa principal de mortalidad en niños y adolescentes, ni tampoco es el mayor motivo por el que pueda requerirse el cuidado duradero de los padres y que dificulte a estos acudir a sus empleos. El número uno se trata de las deno-

7 Ley Federal del Trabajo. Versión electrónica. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>.

8 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Versión electrónica. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf>.

9 Convención sobre los derechos del niño. Versión electrónica: <https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion>.

10 UNICEF, "¿Qué es la adolescencia?", en: <https://www.unicef.org/luruguay/que-es-la-adolescencia#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,los%20a%C3%B1os%20de%2019%20a%C3%B1os>.

11 "Es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos." SCJN, "Interés superior de niños, niñas y adolescentes | ADR 1187/2010". Visto en: <https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/este-mes/interes-superior-de-ninos-ninas-y-adolescentes-adr-11872010>.

12 INEGI, "Mortalidad", consultado en: <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp>.

13 "México, séptimo lugar mundial en siniestros viales" en: <http://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html>.

minadas “Causas externas de morbilidad y de mortalidad”, en otras palabras, de los accidentes, principalmente los de tránsito seguidos de los que se sufren en el hogar¹⁴, y sólo después de estos encontramos al cáncer.

Ahora bien, no pasamos por alto que existen licencias por cuidados maternos que pueden utilizarse ante incidentes de los hijos; sin embargo, su duración es de apenas ocho o diez días, por lo que, al resultar insuficientes, se suelen complementar con días de vacaciones. Asimismo, dependiendo del tratamiento que requiera el hijo accidentado, los hospitales pueden requerir que permanentemente esté presente alguno de los padres, como ocurre cuando se ingresa a terapia intensiva, lo cual desgasta cada día a la persona o personas que se encuentran realizando los cuidados, máxime en los nosocomios públicos que carecen de espacios donde los familiares puedan pernoctar, que prohíben el ingreso de alimentos y cobijas, y que exigen que en todo momento se esté atento de los llamados o requerimientos del personal médico o trabajadores sociales *so pena* de recibir una llamada de atención, perder la oportunidad de ver al internado o retrasar la autorización para un procedimiento urgente.

Así, dado que las causas principales por las que los niños, niñas y adolescentes pueden requerir mayores cuidados de sus padres para su atención y recuperación, al grado que éstos tengan que ausentarse más tiempo de sus centros de trabajo y, en consecuencia, continuará el ausentismo laboral con riesgo de la pérdida del empleo y los derechos humanos de los hijos y los padres en cuestión no lograrán hacerse efectivos.

Podemos sumar a lo anterior el hecho de que en las discusiones del decreto no se formalizó el compromiso de hacer de ésta una licencia progresiva, es decir, que a determinada fecha sumará automáticamente otros padecimientos, como sí lo prevé Chile en la supracitada Ley Sanna, que supuestamente influyó en gran medida al proyecto mexicano, pero éste se quedó muy corto. El Sanna vigente para el pueblo chileno contempló en su inicio, el 1° de febrero de 2018, al cáncer y los tratamientos destinados al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, a partir del 1° de julio de 2018

abarcó los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, desde el 1° de enero de 2020 adicionó la fase o estado terminal de la vida del niño o niña y, desde el 1° de diciembre de 2020 añadió el accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente.¹⁵

El último elemento que trataremos es la limitante de la **licencia a favor del padre o madre trabajador** que ejerza la patria potestad y tenga la guarda y custodia del menor. Al respecto, es importante destacar que al año 2018 se incrementó en un 41.3% la participación de la mujer en el ámbito laboral¹⁶, por lo que han aumentado las familias en las que **ambos padres trabajan** y los hijos suelen quedar al cuidado de otros, como son las guarderías, los abuelos, vecinos e incluso de los hermanos mayores; y por otra parte han **disminuido las familias biparentales** (aquellas en las que viven ambos padres) a un 53.8% al año 2017.¹⁷

Por estas razones, ante la situación de enfermedad que sufra un menor de edad cuyo tratamiento o atención impacte a la familia y les consuma importantes recursos humanos, materiales y económicos, nos parece indudable que si esa familia cuenta con ambos padres o tutores, los dos puedan procurar la atención y cuidados del menor en la medida en que su propia capacidad física se los permita **alternando sus responsabilidades y compromisos** personales, familiares y laborales, pues **dejar esa carga a uno solo de los padres es cruel y desconsiderado**, y no hay razones plenamente justificadas, ni siquiera de carácter económico, para limitar la licencia a uno solo de los padres.

Por todo lo anterior podemos aseverar que la licencia por cuidados médicos que se estableció en los artículos 140 Bis y 37 Bis de la LSS y LISSSTE, respectivamente, discrimina injustificadamente a los adolescentes de entre 16 y 18 años, no contempla los principales padecimientos de niños y adolescentes en nuestro país y, por lo tanto, no influirá decisivamente en la disminución del ausentismo laboral de sus padres, no es progresiva y requerirá necesariamente propuestas de decreto para permitir que se sumen otros padecimientos o condiciones que igualmente requieren el cuidado de los meno-

14 Visto en: <http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201712/398>.

15 Ley SANNA en: <https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-137400.html>.

16 INEGI, “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer. Datos nacionales”, Comunicado de Prensa Núm. 149/23, 7 de Marzo de 2023, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_8M2023.pdf.

17 INEGI, “Características de los hogares”, en: <https://www.inegi.org.mx/temas/hogares>.

res y pueden absorber tiempo laboral de sus padres, y vulnera la igualdad de derechos y obligaciones de los padres y tutores de los niños y adolescentes enfermos de cáncer, dado que la licencia está limitada a uno solo de ellos. De ahí que la reforma de esta licencia para su mejora es necesaria y urgente.

RESULTADOS

Por parte del IMSS, su página electrónica señala que de junio de 2019 a junio de 2021 otorgó 3,429 licencias a 683 padres (403 mujeres y 290 hombres) de pacientes pediátricos oncológicos asegurados, las cuales representaron 49,661 días concedidos y el pago del subsidio por 8.7 millones de pesos.¹⁸ En lo tocante al ISSSTE, su página electrónica carece de información sobre el número de licencias por cuidados médicos que ha revisado y autorizado desde que inició su vigencia.

PROPUESTAS DE REFORMA

Algunos legisladores federales han retomado el tema y reconsiderado sobre los aspectos señalados en líneas que anteceden, de manera que en 2020 y 2022 se han

presentado propuestas de reforma a la licencia para ampliar la edad cubierta del menor hasta los 17 años, para incluir también a los tutores junto con los padres, otorgar la licencia a ambos padres o tutores, para que la licencia se confiera en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud, así como para incluir en la cobertura al trastorno del espectro autista, la diabetes o el virus de la inmunodeficiencia humana.

En el ámbito local tenemos que Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas ya aprobaron una licencia por cuidados médicos en términos similares a la federal; sin embargo, estados como Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, entre otros, carecen de proyectos para incluir la licencia en sus ordenamientos administrativos, tal vez por considerar que basta con la regulación federal existente; en cambio, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas cuentan con iniciativas para reformar sus leyes y adicionar la licencia por cuidados médicos. Esperemos que en breve término todo el país cuente con la regulación federal y local más adecuada de esta licencia.



¹⁸ GOBIERNO DE MÉXICO, "Otorga IMSS 3 mil 429 Licencias 140-Bis a madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos". Visto en: <https://www.gob.mx/imss/prensa/otorga-imss-3-mil-429-licencias-140-bis-a-madres-y-padres-de-pacientes-pediatricos-oncologicos#:~:text=De%20junio%20de%202019%20a,cr%C3%ADticos%20del%20tratamiento%20cuando%20requieran>.



MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTE DELITOS DE FUERO FEDERAL (NARCOMENUDEO)

Ximena Anahi Nolasco Arreola

Estudiante de la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, actualmente cursando octavo semestre.

En los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia penal, el objetivo general es que a través del diálogo las partes lleguen a algún acuerdo en donde haya una disputa que emane entre los dos (víctima e imputado).

LOS MASC EN DELITOS CONTRA LA SALUD

De manera que, en el siguiente artículo, hablaremos si existe mecanismo que pueda ser llevado a cabo en el delito contra la salud, el cual se encuentra consagrado en el Código Penal Federal en su artículo 193. Entendemos como delitos contra la salud el siguiente supuesto: “los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública”. Es por ello que, al ser un delito contra la salud pública, hace que sea imposible que en algún momento dado se pueda reparar el daño.

Dicho lo anterior, entraremos al tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ya con la información recabada y principal de lo que es un delito contra la salud, donde lo encontramos plasmado; no obstante, es sumamente importante saber lo que es un MASC, ¿en qué momento o situación se aplica? y ¿cómo está compuesto?

¿QUÉ ES UN MASC?

Podemos referirnos a éste como un “recurso”, en donde su finalidad es convocar a las partes para que, a través del diálogo, la controversia emanada de ambos (víctima e imputado) con motivo de la denuncia o querella llegue a una solución denominada “acuerdo reparatorio”, con la finalidad de llegar a alguna negociación sin necesidad de llevar a cabo un juicio.

Bajo este tenor, hay tres tipos de mecanismos alternativos para solucionar una controversia en materia penal, éstos están consagrados en la **Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias** (art. 21, 25 y 27). De entre los mecanismos se encuentra la **mediación**, es el facilitador que coadyuva mediante el diálogo a los intervinientes a llegar a una solución rápida de su controversia y, de igual manera, éstos propondrán opciones y resoluciones para su desacuerdo; por otro lado tenemos la **conciliación**, en donde de la misma manera el facilitador, como pieza clave en estos procesos, propone diversas soluciones a los intervinientes para la solución del mismo, en donde ellos de manera libre y autónoma también propondrán opciones; finalmente existe la **junta restaurativa**, denominado así porque de forma colectiva, como lo es la víctima u ofendido, el imputado y como terceros presentes, la comunidad afectada en la situación, se reúnen, del mismo modo, buscan una solución en conjunto con la finalidad de lograr un acuerdo que atienda tanto necesidades individuales como colectivas, así como la reposición del daño hacia la víctima y que el imputado componga el daño provocado.

De manera que es muy importante tener en cuenta que los MASC únicamente se aplican en dos supuestos; desde el momento de la denuncia o la querella o antes del dictado de un auto de apertura a un juicio oral, o bien, al formular conclusiones. No obstante, como el Código de Procedimientos Penales lo indica en el artículo 187 en el **Control sobre los acuerdos reparatorios**, los mecanismos alternativos solamente proceden en los casos de delitos que se persigan por querella, en donde la víctima u ofendido puedan otorgar el perdón, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia.

Por lo que, podemos darnos cuenta, no todos los delitos son aptos para el proceso de los MASC,

principalmente tratándose de que el imputado haya celebrado el mismo acuerdo procedente de la misma naturaleza jurídica, a menos que hayan pasado cinco años después del acuerdo reparatorio y haberle dado cumplimiento a este; asumimos que tampoco se podrá celebrar tratándose de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. En vista de dichas reglas o consideraciones que se presentan para la aplicación de dicha herramienta que va coadyuvar a la solución de la controversia, es importante saber que el acuerdo reparatorio nos va a brindar dos tipos: el acuerdo inmediato, en donde el cumplimiento se tiene que hacer en el momento y, el acuerdo diferido, en donde el imputado tiene un plazo de 3 años para la reparación del daño.

APLICACIÓN DE LOS MASC EN DELITOS CONTRA LA SALUD

Expuesto lo anterior, conociendo los delitos y supuestos en los que aplican y no los MASC, ahora podemos analizar que el delito que vamos a exponer tiene un largo puente en donde hace imposible que dicho recurso pueda ser parte de nuestro proceso, pero, sobre todo, que sea capaz de subsanar los daños hacia el ofendido (la salud pública).

Las razones son simples y, es que, en primer lugar, tenemos que es un delito que, como anteriormente mencionamos, es perjudicial de forma colectiva, para lo cual es casi imposible resarcir el daño; no se persigue por querrela y no podemos hablar de algún afectado en específico que otorgue el perdón, pero sobre todo y lo más importante es que es un delito que, para empezar, tiene una pena que va desde los 10 a los 25 años, hablando en el supuesto de que el individuo produzca, transporte, trafique, comercie y suministre o realice una prescripción sin la autorización conferida por la Ley General de Salud, claro que la pena va cambiando en cuestión de las condiciones en las que se cometa el delito, las agravantes y quien esté involucrado en la conducta; tanto así que, incluso, el individuo que no llegase a consumir el acto, pero que igual se le “sorprenda” tratando de llegar a esa finalidad, de cualquier modo se le impondrán las 2/3 partes de la pena antes expuesta.

Dicho esto, es parcial o totalmente imposible que el delito que plasmamos sea admitido por nuestra herramienta llamada MASC e, incluso, si nos queremos ir por la vía de procedimiento abreviado es igual de imposible, dado que uno de los requisitos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales es que el acusado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y que no haya sido condenado previamente por un delito doloso, adicionando que la media aritmética no sea mayor a 5 años, para lo cual no se puede efectuar, ya que haciendo la

cuenta da un total de 7 años y medio aproximadamente. No obstante, con base en el artículo publicado por Javier Cruz Angulo nos dice que

no existe posibilidad alguna de medios alternativos de solución del delito; ya porque son graves -aún en el nuevo sistema penal acusatorio- o bien, porque la negociación ya está prevista en la ley, como en el caso de los delitos fiscales (...), la creación de unidades especiales de **mediación** o centros de **conciliación** no son una figura idónea por la cantidad de recursos públicos que se destinarían a casos tan excepcionales. En sentido contrario, la opinión es que después del pago de la reparación del daño económico, sea el legislador penal el que establezca medidas como: (i) trabajo comunitario, (ii) tratamiento psicológico, (iii) tratamiento de adicciones, (iv) disculpa pública en medios impresos nacionales, (v) prohibición de ir a lugar determinado, y otros medios que ya están en ley y con los funcionarios que ya cuenta el Estado Mexicano.

Bajo esa tesitura, podríamos decir que la imposibilidad de optar por un MASC en los delitos contra la salud ya no se ve muy alejada, por lo que el uso de facultad legislativa podría hacer que el ajuste de una mediación o conciliación sea un camino viable para que el imputado no tenga la posibilidad de ser llevado a juicio y, sobre todo, no ser sentenciado, pero sí establecerle medidas de reparación de daño a la salud de la población.

CONCLUSIÓN

De ahí que se concluye que la aplicación de los MASC nos resulta evidentemente imposible en los delitos cometidos en contra de la salud, los supuestos previstos en la ley y el código no son de manera adecuada para la aplicación de los MASC, ya que, como mencionamos al inicio, éstos deben llevar ciertos requisitos o supuestos que den como resultado la posibilidad de encontrar el método para solucionar un conflicto; la mediación, conciliación o la junta restaurativa. Por lo tanto, a falta de incumplimiento en los supuestos requeridos para poder tener como recurso un MASC, los delitos contra la salud se ven muy alejados para poder contemplar en su momento un mecanismo alternativo; como se menciona anteriormente, es un delito que es casi imposible de resarcir el daño. Sin embargo, con la ayuda de un buen análisis legislativo, este delito pueda en su momento ser modificado y establecer condiciones al imputado que deba de llevar a cabo para no ser sentenciado y restaurar el daño ocasionado.

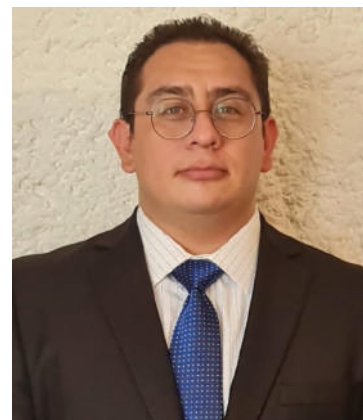
ESTUDIA TU DOCTORADO EN DERECHO

SEMESTRAL RVOE 20130002

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX



PRESCRIPCIÓN. CONSECUENCIAS FISCALES EN PERSONAS FÍSICAS



L.C. E.F. Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado

Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y E.F. por la División de Posgrado de la misma Facultad. Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo egresado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ). Expositor de temas fiscales y catedrático a nivel Licenciatura. Estudiante de la Licenciatura en Derecho (CUEJ).

Entendemos a la prescripción como un medio para adquirir bienes o librarnos de obligaciones, mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

Los tipos de prescripción que contempla el Código Civil del Distrito Federal son:



En lo que respecta a la prescripción positiva, puede ser de buena o de mala fe, se da cuando se adquieren bienes; es también conocida como usucapión y requiere, en términos generales, que la posesión sea:

- A)** Bajo el concepto de propietario.
- B)** Pacífica.
- C)** Continua y
- D)** Pública.

Con respecto a la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Por mencionar algunos ejemplos tenemos:

CONCEPTO	PLAZO DE PRESCRIPCIÓN	FUNDAMENTO
· Honorarios profesionales · Cobro de comerciantes a personas no revendedoras	02 Años	Artículo 1161 del CCDF
· Rentas y alquileres	05 Años	Artículo 1162 del CCDF
· Casos no mencionados en el CCDF	10 Años	Artículo 1159 del CCDF
· Ventas al por menor	01 Año	Artículo 1043 del Código de Comercio
· Ventas de mayoreo	10 Años	Artículo 1047 del Código de Comercio
· Posesión de bienes inmuebles de buena fe	05 Años	Artículo 1152 del CCDF
· Posesión de bienes inmuebles de mala fe	10 Años	Artículo 1152 del CCDF

· Posesión de bienes muebles de buena fe	03 Años	Artículo 1153 del CCDF
· Posesión de bienes muebles de mala fe	05 Años	Artículo 1153 del CCDF
· Otros casos no mencionados en el Código de Comercio	10 Años	Artículo 1047 del Código de Comercio

Dichos plazos pueden verse interrumpidos en los siguientes casos:

- I. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa por más de un año;
- II. Por demanda o cualquier otro género de interposición judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso.
- III. Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.

De suceder lo anterior **empezará a contarse el nuevo término de la prescripción.**

Hasta lo expuesto en este momento, adquirir un bien o librarse del pago de una deuda por el simple transcurso del tiempo parece el resultado de contar con muy buena suerte; sin embargo, cuando el contribuyente cae en estos supuestos, la autoridad Hacendaria considera que hay un ingreso que requiere el pago de un impuesto, específicamente el Impuesto Sobre la Renta.

En efecto, bajo la lógica del fisco, no pagar una deuda se equipara a una disminución patrimonial que no sucedió, a un recurso que el contribuyente no utilizó y que mantiene sus activos intactos, un ahorro del que la autoridad como “socio perpetuo” reclama su parte. De tal manera que debemos atender

inicialmente el tipo de prescripción para cumplir correctamente con la determinación y periodicidad del pago de la contribución.

ISR EN PERSONAS FÍSICAS POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA

De este modo el artículo 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Fracción I establece que las deudas que se dejen de pagar por prescripción serán objeto del pago del tributo; atendiendo a dos posibles escenarios.

- I. **Deudas provenientes del sistema financiero:** Se gravará la diferencia que resulte de restar del principal actualizado el monto condonado.
- II. **Deudas no provenientes del sistema financiero:** Se acumulará el total de la condonación.

En estos casos, los contribuyentes acumularán a sus ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales el importe acumulable determinado y pagarán el impuesto, aplicando tablas y tarifas, el día 17 del mes inmediato posterior.

Tratándose de personas físicas que no realicen las actividades mencionadas, atendiendo al Artículo 142 Fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deberán pagar el 20% sobre el ingreso determinado, sin deducción alguna, y enterarlo en calidad de pago provisional dentro de los quince días siguientes.

ISR EN PERSONAS FÍSICAS POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA

Hablando de la adquisición de bienes, en materia de personas físicas, dicho acto *per se* denota el incremento patrimonial del contribuyente. Por lo que es menester atender a lo establecido en el Artículo 130 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que señala a la adquisición por prescripción como un ingreso del capítulo V de la citada Ley (Ingresos por adquisición de bienes).

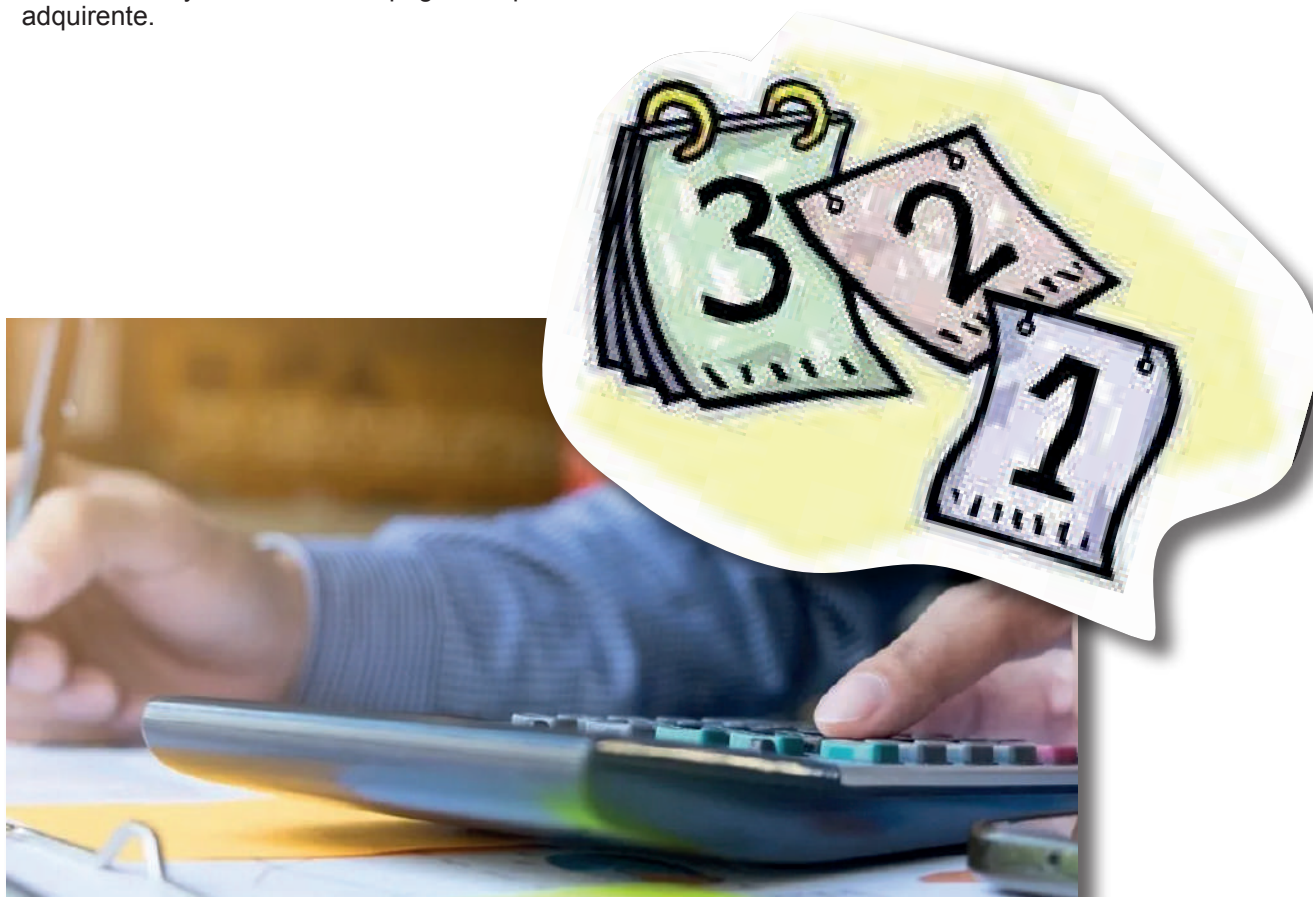
En este caso el ingreso objeto de tributo será el que resulte del valor del avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales, del cual se debe cubrir el 20% del total como pago provisional de ISR, dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.

Adicional a lo anterior, el contribuyente debe presentar declaración anual donde al ingreso total obtenido le podrá disminuir erogaciones por concepto de:

- A)** Contribuciones locales y federales.
- B)** Gastos notariales.
- C)** Pagos efectuados con motivo del avalúo.
- D)** Comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.

Al resultado se le aplicarán las tablas y tarifas anuales, obteniendo el ISR del ejercicio; el cual disminuirémos acreditando el pago provisional (del 20%) enterado.

Podemos concluir que la adquisición de un bien y/o la liberación del pago de una deuda por el transcurso del tiempo conllevan repercusiones fiscales que, atendiendo al acreedor, la actividad del contribuyente y el tipo de prescripción, ubican al sujeto pasivo en distintos escenarios fiscales, que parametrizan de forma diversa el importe del impuesto y su periodicidad de pago.





VENTANILLA ÚNICA MARÍTIMA

Mtro. Cap. Alt. Rodolfo Rey Ali Rivera Hernández

Capitán de Altura, Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo, Licenciado en Derecho con Especialidad en Derecho Marítimo, Ordenación Administrativa de la Navegación y Derecho Portuario, Maestro en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales, Miembro fundador y Secretario de la Asociación Civil Marinos Mercantes del Golfo, Asesor Marítimo-Portuario, Legislación Marítima y códigos Internacionales, Marino Mercante Activo. Actualmente Maestrando en Derecho Marítimo y Derecho Portuario, Doctorando en Derecho en el CUEJ.

La Organización Marítima Internacional (OMI) organizó conjuntamente un simposio con la International Association of Ports and Harbors (IAPH) y BIMCO, en el cual se discutió la implementación de la ventanilla única marítima. A partir del 1 de enero de 2024¹, esta implementación será obligatoria debido a la entrada en vigor de las enmiendas del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional de 1965, conocido internacionalmente como Convenio FAL-65. Esto requerirá que los puertos de todo el mundo utilicen ventanillas únicas marítimas.

Este cambio obligatorio surge tras la adopción por parte del Comité de Facilitación de la OMI de enmiendas al Convenio de Facilitación (FAL). Estas enmiendas establecen la obligación de la digitalización para todos los puertos del mundo. Según estas nuevas enmiendas, cada puerto deberá contar con un sistema de ventanilla única marítima para el intercambio de información digital entre las partes interesadas sobre la llegada, estadía y partida de los buques en puerto, así como las normas y prácticas recomendadas, y las reglas para simplificar los trámites, documentos y formalidades requeridos.

Con el objetivo de mejorar los procesos relacionados con los servicios nacionales e internacionales mediante la integración de la digitalización y la automatización, también se hace hincapié en la necesidad de

promover buenas prácticas y recomendaciones para prevenir la corrupción y las actividades ilícitas en el sector marítimo portuario.

El Convenio de Facilitación (FAL) establece y estipula



¹ OMI, "Un año para que la ventanilla única marítima sea obligatoria", 27 enero 2023, en <https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/Mandatory-Maritime-Single-Window-One-year-to-go.aspx>

varios puntos que deben ser examinados. Se considera conveniente que las Ventanillas Únicas se utilicen como mecanismo para que las autoridades públicas comuniquen decisiones y otra información contemplada por el convenio. Además, se busca introducir sistemas de intercambio electrónico de información sobre la llegada, permanencia y salida del buque, así como sobre las personas y la carga, con el objetivo de facilitar los trámites de despacho.

Los Gobiernos Contratantes fomentarán a las autoridades públicas y a otras partes interesadas (propietarios de buques, compañías de manipulación de carga, puertos marítimos, agentes de carga, etc.) a que realicen el intercambio de datos de acuerdo con las normas correspondientes de las Naciones Unidas. Estas normas incluyen la norma de intercambio electrónico de datos para la administración del comercio y el transporte de las Naciones Unidas (Naciones Unidas/EDIFACT), así como otras normas internacionalmente acordadas, como el lenguaje XML.

Cuando se planifiquen, introduzcan o modifiquen sistemas de intercambio electrónico de información para los trámites de despacho, las autoridades públicas deberán:

- A)** Ofrecer a todas las partes interesadas, desde el comienzo, la oportunidad de realizar consultas;
- B)** Evaluar los procedimientos actuales y eliminar los que sean innecesarios;
- C)** Determinar los procedimientos que deban informatizarse;
- D)** Utilizar al máximo posible las recomendaciones de las Naciones Unidas, los paquetes de información de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y las normas pertinentes de la Organización Internacional de Normalización (ISO);
- E)** Adaptar dichos sistemas a las aplicaciones multimodales;
- F)** Tomar las medidas necesarias para minimizar el costo de implementación de dichos sistemas por los armadores y otras empresas privadas y;
- G)** Estudiar la conveniencia de lograr su compatibilidad con otros sistemas de información pertinentes.

Además, todos los Estados miembros de la OMI tienen el mandato de colaborar y combinar en sus autoridades portuarias públicas, asegurando que la información presentada o proporcionada sea única y reutilizable en la medida de lo posible. Esto implica consolidar toda la información presentada electrónicamente y utilizar los sistemas de Ventanillas Únicas. Se espera que los puertos de todo el mundo cumplan con este mandato antes o el 1 de enero de 2024. Esto significa que el sector marítimo deberá avanzar gradualmente hacia una digitalización completa antes de esa fecha para poder trabajar con una Ventanilla Única Marítima.

La eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental de una escala portuaria dependen de una comunicación clara entre todas las partes involucradas en la interfaz buque-puerto antes, durante y después de las operaciones. Aunque existen varias normas locales relacionadas con la comunicación y el intercambio electrónico en el sector, muchas de ellas no se utilizan o aplican de manera sistemática en todo el mundo. No obstante, se reconoce ampliamente que mejorar la calidad y disponibilidad de los datos operacionales en tiempo real facilita la llegada, estadía y salida de buques, personas y carga en los puertos.

Entre las partes involucradas se encuentran los propietarios de buques, los armadores, los fletadores, los agentes de buques, las autoridades portuarias estatales, los operadores de terminales, las empresas de remolque, las empresas de prácticos, las empresas de amarre, las autoridades portuarias y otras autoridades pertinentes. Es crucial lograr la armonización en la comunicación y el intercambio electrónico de datos operacionales entre todas estas partes, ya que cualquier falta de comunicación puede resultar en ineficiencias operacionales o incluso eventos que pongan en peligro la seguridad, la protección portuaria y/o el medio ambiente.

Actualmente los buques tienen la obligación de notificar al puerto por adelantado, por ejemplo, 72 y 24 horas, su llegada a una zona portuaria; la información intercambiada se basa principalmente en las prescripciones del Convenio SOLAS y el Convenio de Facilitación, el cual intercambia datos operativos con las partes interesadas del puerto días antes de la escala del mismo como lo son los formularios del Convenio FAL que incluye en su norma 2.1 una lista de documentos que las autoridades públicas pueden exigir de un buque. La OMI ha desarrollado formularios normalizados para siete de estos documentos, que son

- Declaración General de la OMI (Formulario FAL 1 de la OMI)

- Declaración de la carga (Formulario FAL 2 de la OMI)
- Declaración de provisiones (Formulario FAL 3 de la OMI)
- Declaración de efectos de la tripulación (Formulario FAL 4 de la OMI)
- Lista de la tripulación (Formulario FAL 5 de la OMI)
- Lista de pasajeros (Formulario FAL 6 de la OMI)
- Manifiesto de mercancías peligrosas (Formulario FAL 7 de la OMI)

Con el fin de cumplir con el compromiso internacional y el mandato de la Organización Marítima Internacional (OMI), México, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, ha creado una Plataforma Tecnológica Integral llamada Puerto Inteligente Seguro (PIS). Esto se realiza en conformidad con las enmiendas al Anexo del Convenio FAL y las Directrices para el establecimiento de un sistema de ventanilla única en el transporte marítimo. El objetivo es fortalecer la seguridad mediante la digitalización y sistematización de los procesos operativos y administrativos, mejorando la eficiencia y capacidad del Sistema Portuario Nacional.



La Plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS)² garantiza la protección marítima y portuaria para los

usuarios, desarrollando y fortaleciendo capacidades tecnológicas y de respuesta oportuna. Este sistema de información multiplataforma escalable, confiable y seguro, con servicio administrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es la primera plataforma tecnológica portuaria en México que maneja datos validados por otras entidades, dependencias e instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Cuenta con elementos confiables de seguridad e inteligencia artificial.

La plataforma optimiza la gestión y automatización de los procesos logísticos en la cadena logística Marítima Portuaria. La digitalización permite trabajar con mayor eficiencia y seguridad, reduciendo retrasos significativos en tiempo y costos operativos. Se busca una visión de logística integral mediante la digitalización y automatización de trámites.



Para utilizar la plataforma PIS, se ha creado la Puerto Seguro Inteligente Academia (PIS Academia), que ofrece cursos en línea para capacitar a las personas en temas tecnológicos relacionados con la plataforma PIS.³

Hasta ahora, se han capacitado a 1,250 personas que trabajan en el Sistema Portuario Nacional, lo que representa el 90% del personal laboral en el sistema. Actualmente hay 3,000 usuarios inscritos, incluyendo personal de terminales, transportistas, operadores logísticos, marinos mercantes y usuarios de servicios portuarios.

Esto permite a México cumplir con el mandato de la Organización Marítima Internacional (OMI) en tiempo y forma. La OMI estableció que los países firmantes deben implementar la ventanilla única marítima a partir del 1 de enero de 2024. Esta ventanilla única permite la gestión de la información de usuarios públicos y privados del sector, agilizando la gestión de escalas de buques y el movimiento de mercancías. Su implementación permite presentar electrónicamente todos los datos requeridos en un único punto de entrada, con el objetivo principal de reducir las cargas administrativas y mejorar la eficiencia del transporte y comercio marítimo.

² Puerto Inteligente Seguro, en <https://implementa.puertointeligenteseguro.com.mx/>

³ Puerto Inteligente Seguro Academia, en <https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/>

ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL CAPÍTULO SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MARCO DEL T-MEC

Dr. Hadar Moreno Valdez

El Dr. Hadar Moreno Valdez estudió el Doctorado, la Maestría y la Licenciatura en Derecho por la UNAM. Cuenta con el Doctorado **honoris causa** por el CUEJ. Es miembro del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM; cuenta con múltiples certificaciones internacionales y ha fungido como funcionario público en distintas áreas. Asimismo ha sido autor, coautor y colaborador en más de quince publicaciones en temas de comercio exterior y fiscal en México. También ha sido catedrático en varias universidades y ponente en diversos foros.



Mtra. Amara A. Lizárraga Moguel

La Mtra. Amara A. Lizárraga Moguel es ex alumna de la Maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y Directora de la Empresa Intralogimex.



Por medio del presente artículo, se procederá al análisis de un tema relevante en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto es, se examinará el Capítulo 25, denominado como “Pequeñas y medianas empresas”, tema que nos parece resulta ser una cuestión sumamente interesante, atendiendo a la importancia que tienen este tipo de empresas para el desarrollo económico y comercial de los tres países, mismos que forman parte del propio instrumento internacional de referencia.

Atendiendo a lo previsto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el Capítulo denominado como “Pequeñas y medianas empresas”¹, el mismo indica que los Estados de la región han reconocido el papel fundamental que dichas empresas guardan en el mantenimiento del dinamismo y mejoramiento de las economías de cada uno de los países; por ende, se regula un capítulo específico mediante el cual se fomenta la participación y la actividad comercial de dichas empresas en la región de América del Norte.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha referido que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es una prioridad para los responsables de la formulación de las políticas públicas en toda América Latina y el Caribe. Las PYMES, se dice, constituyen el 99,5% de las empresas de la región (casi 9 de cada 10 son microempresas) y generan el 60% del empleo productivo formal. Sin embargo, ello ocurre pese a que se considere normal que las PYMES presenten niveles de productividad más bajos que las grandes empresas; las PYMES latinoamericanas presentan una brecha de productividad particularmente significativa, ya que son responsables de sólo una cuarta parte del valor total de la producción de la región. En este contexto, se dice que la OCDE está colaborando con la región para fortalecer la formulación de políticas relacionadas con las PYMES como instrumento para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo productivo, utilizando el índice de Política para las PYMES y los estudios de países.²

¹ Gobierno de México, Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México, 03 de junio de 2019. Ubicado en la página: <https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published>

² OECD, Apoyando el desarrollo de las PYMES en América Latina y el Caribe, The OECD and Latin America & the Caribbean, Portal de la OECD. Documento consultado en la página: <https://www.oecd.org/latin-america/programa-regional/productividad/desarrollo-de-las-pymes/>

De acuerdo con Milka Elena Escalera Chávez, en diferentes investigaciones empíricas, las pequeñas y medianas empresas han sido señaladas como uno de los principales participantes del crecimiento económico, así como de la creación de empleos de un país. En Estados Unidos y Canadá las pequeñas empresas constituyen el 97% de todos los negocios, emplean un 57% de la fuerza laboral y producen el 45% del producto interno bruto (Ibrahim y Goodwin, 1986). Leebaert (2005) reporta que las PYMES de Estados Unidos representan un 99,7% de todos los empleadores en Estados Unidos. Según Hernández y Bruch (1983 citados por Dart y Sarkar, 1990) en los países como Alemania, el 98% de todas las empresas industriales son PYMES con 500 trabajadores o menos y producen casi el 33% del volumen de negocio industria; igualmente en Italia, Suecia, Japón, Indonesia y en Malasia las PYMES contribuyen en promedio con un 90% del total de empleos.³

Como podrá observarse de lo expuesto en líneas anteriores, en diversos países y América del Norte no es la excepción, existe una enorme preocupación por hacer que las pequeñas y medianas empresas participen cada vez con mayor fuerza de las actividades comerciales que se realizan, máxime que dichas empresas enmarcan la mayor fuerza laboral con que cuenta cada Estado. Consecuentemente, generar un mayor acercamiento del libre comercio a las pequeñas y medianas empresas constituye un desafío, pero, a la vez, una necesidad apremiante a fin de acelerar el comercio internacional en cualquier zona del mundo y Norteamérica no resulta ser la excepción.

En este sentido, en el marco del T-MEC se prevé que cada parte del Tratado debe buscar incrementar las oportunidades de comercio e inversión y, en particular, tiene entre otros aspectos:

A) La obligación de promover la cooperación entre la infraestructura de apoyo a los pequeños negocios de sus respectivos países, incluida la instauración de centros dedicados a las pequeñas y medianas empresas, igual se habla de la instauración de incubadoras y aceleradoras de creación de empresas, la instauración de centros de asistencia a la exportación, etc.

B) Se busca establecer una red internacional para compartir las mejores prácticas entre empresas

e intercambiar investigaciones de mercado, fomentando de esta manera la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el comercio internacional para apoyar el crecimiento de los negocios dentro de los mercados locales.

C) Se prevé que debe fortalecerse la colaboración entre los países del T-MEC en actividades para promover a las PYMES, por ejemplo, pertenecientes a grupos sub-representados, como pueden ser, a saber: mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y minorías, así como start-ups, PYMES agrícolas y rurales y, en su oportunidad, promover la asociación entre dichas empresas, generando así una mayor participación en el comercio internacional.

D) Incrementar la cooperación con los gobiernos de los países a fin de intercambiar información y mejores prácticas en áreas en donde existan ventanas de oportunidad para este tipo de empresas, sobre todo en rubros de capital y crédito.

E) Generar la participación de las empresas en plataformas en la web, a fin de que los empresarios y consejeros comerciales compartan información y mejores prácticas para ayudar a las PYMES y, con ello, puedan a su vez vincularse con proveedores, compradores y otros socios comerciales potenciales de orden internacional.

Los países que forman parte del T-MEC deben desarrollar acciones de apoyo para las PYMES y, por ende:

■ En los sitios web de los respectivos países deben hacer que las agencias gubernamentales y otras entidades correspondientes provean información y cuenten con los datos relacionados con personas interesadas en realizar actividades comerciales sobre bienes y servicios, en los territorios de cada uno de los Estados.

■ Los gobiernos deben informar acerca de:

• Regulaciones, procedimientos o puntos de contacto aduaneros.

³ ESCALERA CHÁVEZ, Milka Elena, *El impacto de las características organizacionales e individuales de los dueños o administradores de las pequeñas y medianas empresas en la toma de decisiones financieras que influyen en la maximización del valor de la empresa. Decisiones financieras y la maximización del valor de la empresa*, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 2007. Documento ubicado en la página: <https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/meec/Importancia%20de%20las%20PyMES.htm>

- Regulaciones o procedimientos concernientes a los derechos de propiedad intelectual.
- Reglamentos técnicos, normas o procesos de evaluación de la conformidad.
- Medidas sanitarias o fitosanitarias relacionadas con la importación o exportación de productos.
- Regulaciones sobre inversión extranjera que se establezcan en los países.
- Procedimientos para el registro de negocios.
- Programas de promoción comercial.
- Generar programas de competitividad.
- Contar con programas de financiamiento para las PYMES.
- Informar acerca de las regulaciones laborales.
- Referir la información tributaria correspondiente.
- Contar con información relacionada con la entrada temporal de personas de negocios.

En el T-MEC se prevé la instauración de un Comité de Asuntos PYMES, el cual estará integrado por representantes gubernamentales de cada país, y el mismo deberá:

- Identificar formas de ayudar a las PYMES en los territorios de cada uno de los Estados.
- Aprovechar las oportunidades comerciales resultantes del tratado.
- Recomendar formas para una mayor cooperación entre los países en esta materia.
- Intercambiar y analizar las experiencias y mejores prácticas comerciales para apoyar y asistir a las PYMES exportadoras.
- Generar programas de capacitación, educación comercial, financiamiento comercial, misiones co-

merciales, facilitación del comercio, comercio digital, e identificación de socios comerciales en los distintos territorios de cada nación.

- Desarrollar y promover seminarios, talleres, seminarios web u otras actividades para informar a las PYMES en relación a los beneficios disponibles para ellas.
- Explorar oportunidades para facilitar el trabajo de cada país en el desarrollo y mejoramiento del asesoramiento a la exportación, asistencia y programas de capacitación.
- Recomendar información adicional en sitios web sobre el tema.
- Revisar y coordinar sus programas de trabajo con otros comités y en general con cualquier órgano subsidiario del propio T-MEC.
- Colaborar con incentivar a los comités, grupos de trabajo y otros órganos subsidiarios para lograr el cumplimiento de los compromisos relacionados con las PYMES.
- Revisar la instrumentación y operación del presente capítulo sobre pequeñas y medianas empresas.
- Facilitar el desarrollo de programas para asistir a las PYMES y que las mismas puedan integrarse en las cadenas de suministro regionales y globales de los países.
- Promover la participación de las PYMES en el comercio digital.
- Facilitar el intercambio de información sobre programas de educación emprendedora para jóvenes y grupos sub-representados.

- Considerar cualquier otro asunto relacionado con las PYMES.
- El Comité PYME deberá convocar a un diálogo trilateral sobre las PYMES, llamado “Diálogo PYME”. El mismo podrá incluir al sector privado, empleados, organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, propietarios de PYMES de grupos diversos y sub-representados, así como a otras partes interesadas de cada país.

En el presente capítulo, se indica que los países reconocen que existen disposiciones en otros capítulos del T-MEC, que buscan mejorar la cooperación entre los gobiernos en asuntos relacionados con las PYMES, los cuales incluyen: procedimientos de origen, contratación pública, facilitación de la participación de las PYMES, comercio transfronterizo de servicios, comercio digital, Comité de Derechos de Propiedad Intelectual, temas laborales, competitividad, anticorrupción y buenas prácticas regulatorias, entre otros.

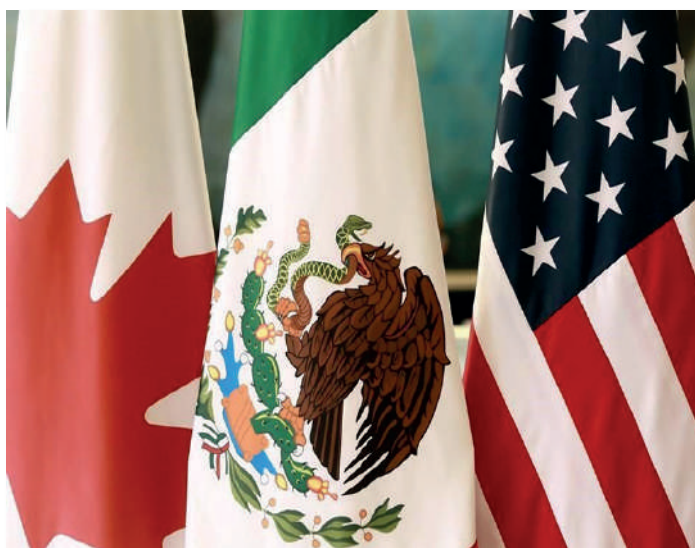
Resulta importante precisar que ninguna de las Partes en el T-MEC podrá recurrir a la solución de controversias conforme al Capítulo 31 -Solución de Controversias general- para resolver un aspecto que surja en relación con el presente capítulo sobre pequeñas y medianas empresas.

En opinión de Ana Isabel Sordo, las PYMES son una importante fuente de riqueza en el país, pues sus actividades económicas representan más del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Esto significa que los negocios pequeños contribuyen con más de la mitad de las operaciones financieras en el territorio nacional. Refiere que el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional emplea a cerca del 70% de las fuerzas trabajadoras y productivas en el país. Lo cual se traduce en que, sin PYMES, los niveles de desempleo serían aún más elevados en México y, por lo tanto, también los índices de pobreza. Asimismo, menciona que según los datos del INEGI (2020): el 37,2% de los trabajadores en el país son empleados de micro-empresas, 14,8% son empleados de pequeñas empresas, 15,9% de medianas empresas, 63% de los empleados en PYMES son hom-

bres y 37% mujeres; desde el año 2005 ha habido un crecimiento del 60% en el número de PYMES en el país y durante el año 2009 se crearon más de 600,000 nuevas PYMES en México.⁴

CONCLUSIÓN

Se estima que el Capítulo sobre “Pequeñas y medianas empresas”, en el marco del T-MEC, puede llegar a constituir un rubro que ayude a impulsar a mediano y largo plazo el desarrollo económico de los países que forman parte de dicho instrumento comercial. Los nuevos desafíos comerciales provenientes de Asia demuestran la necesidad de una mayor cooperación e interacción de todos los actores industriales en la región de América del Norte. Por ende y, en la medida en que las pequeñas y medianas empresas tanto de los Estados Unidos, así como de México y Canadá se fortalezcan y participen cada vez más activamente en las cadenas de suministro y operación en la región, los propios países, como se ha comentado, se fortalecerán desde sus propias bases económicas; lo anterior, habida cuenta que gran parte de la población trabaja en dichos sectores industriales. Por lo que, en este sentido, se estima que no debiera desaprovecharse la oportunidad de incorporar en la mayor medida posible a las pequeñas y medianas empresas en los respectivos campos del comercio exterior en la zona de Norteamérica.



4 SORDO, Ana Isabel, “PYMES en México: qué son, qué importancia tienen y ejemplos”, en *HubSpot*, México, 20 de enero de 2023. Documento consultado en la página: <https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-pymes-en-mexico>

LA ILICITUD PROBATORIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Mtro. Alberto Azael B. Roldán

Catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Maestro en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como Asesor Jurídico Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el área de Delitos de Género. Actualmente funge como Fiscal Federal en la Fiscalía General de la República con diversos cursos y diplomados en atención a Delitos de Género, Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y cometidos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.



La Etapa Intermedia es una de las más importantes dentro del llamado Nuevo Sistema Penal Acusatorio, ya que en esta etapa su objetivo es depurar los medios de prueba, mismos que se convertirán en la etapa de Juicio en órganos de prueba, pues es el filtro en donde se expondrán al Juez la pertinencia de dichos órganos de prueba para ser llevados a Juicio y el por qué deben ser fundamentales para nuestra teoría del caso.

Tenemos que tomar en cuenta que dichos elementos de prueba para ser llevados a la etapa intermedia y poder debatir sobre su admisión o exclusión, se tendrá que atender en cada específico, pues en cada delito cada dato de prueba modular es diferente; por ejemplo, en un delito de violación tenemos que una de las pruebas fundamentales es la entrevista de la víctima, así como un dictamen en psicología y quizás un dictamen en ginecología que pueda abordar los datos más importantes a fin de establecer los elementos suficientes para su acreditación. Pues en este tipo de delitos, que por su naturaleza la mayoría son de realización oculta, es decir, buscan la ausencia de testigos de este tipo de hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la entrevista de la víctima es fundamental siempre y cuando se corrobore con otros datos de prueba que la robustezcan, tales como el dictamen en psicología al que hago referencia y el ginecológico, entre otros, pero que, aun así al ser un delito, como ya se refirió, de realización oculta, no se espera el hallazgo de pruebas gráficas por regla general, esto conforme a la naturaleza del delito y a su bien jurídico tutelado. Como vemos, la etapa intermedia atenderá al tipo de caso en que nos encontremos, pero en todos las

reglas son las mismas para admitir o excluir los datos de prueba, en este caso nosotros y los futuros licenciados en Derecho, como operadores del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, tendremos que acreditar la pertinencia e idoneidad de los elementos de prueba que pretendamos que se admitan para el auto de apertura a juicio oral, pues se debe convencer al Juez de la relevancia de los mismos sin caer en algún supuesto de exclusión consagrado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra dice:

Art. 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser:
 - a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial

o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones;

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos;

II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;

III. Por haber sido declaradas nulas, o

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo.¹

En este artículo nos enfocaremos en la fracción II, la cual nos dice que será excluido el medio de prueba que se haya obtenido con violación a derechos fundamentales, en donde el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala lo que se entiende por prueba ilícita:

Artículo 264. Nulidad de la prueba

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.²

La profesora Bernadette Minvielle define la prueba ilícita como "un medio de prueba obtenido fuera del proceso en violación de derechos constitucionales, principalmente, los que integran la categoría denominada derechos a la personalidad".³

En México tenemos dicha prueba ilícita regulada y que no podrá ser materia de admisión, pero aquí dentro de este artículo quisiera avocarme a un ejemplo en el delito de Trata de Personas. La

Defensa del Imputado podría ofrecer como medio de prueba videograbaciones de las víctimas, toda vez que pretenda acreditar pertinente que en ese video se veía que las víctimas no estaban siendo retenidas (uno de los elementos del tipo penal de trata de personas) y, que lo que hacían era bajo su consentimiento y no se veían amenazadas ni violentadas, por lo que quería alegar una atipicidad en el juicio, ya que no se acreditaba el tipo penal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual; pues bien en este asunto se admitió ese medio de prueba para efectos del Juicio.

Ya en el desahogo del Juicio, al momento de poder recibir al perito que iba a desahogar dicho video, el Tribunal de Enjuiciamiento, y una vez planteada una incidencia respecto de este tópico, al preguntar al oferente sobre la prueba, de dónde habían sido obtenidos esos videos, respondió que de ciertas páginas de Facebook de las víctimas, sin autorización de las víctimas para haberlos tomado. Por lo que trató de argumentar que Facebook era una red social y el contenido que se subía ahí era de dominio público, pero una vez analizados los términos y condiciones de dicha red social, se advierte que no se podía reproducir contenido parcial o total por terceros fuera de la plataforma, y menos aún desde un perfil privado; por lo que estaba violentando la manera en que obtuvo ese medio de prueba y más aún toda vez que violó un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad de las víctimas a su vida personal y, que el mismo derecho fundamental fue violentado. Por lo cual, este órgano de prueba se consideró violatorio de derechos humanos, se tuvo por ilícita la prueba y no se desahogó.

Es por ello que este parámetro es fundamental, lo que nos menciona el artículo 264, precisamente previendo el legislador que pueden admitirse pruebas que en su momento del desahogo se pueda advertir que fueron obtenidas con violación a derechos fundamentales, pues, como en este ejemplo, al no tener el Juez en este sistema penal acceso a la carpeta de investigación, no podía advertir al momento de la Etapa Intermedia que dicha probanza fuera violatoria de Derechos Humanos, sino hasta la Etapa de Juicio en donde se advirtió

¹ Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 346.

² Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 264.

³ GUTIERREZ MOYA, Carlos, "La Prueba Ilícita: Las Reglas de Exclusión de Medios Probatorios Obtenidos Vulnerando Derechos Fundamentales", *La Revista de Derecho. Sociedad*, Año VIII, No. 3, Santiago de Chile, diciembre de 2002, p. 65.

la violación y, con fundamento en el artículo 264, se pudo subsanar en su momento y excluir dicho órgano de prueba.

Uno de los derechos fundamentales como seres humanos actualmente es el derecho a la personalidad, mismo que tiene diferentes perspectivas en cada país, pero que su objetivo es garantizar la privacidad de toda persona siempre y cuando no se contravenga ningún principio procesal penal o alguna cuestión jurídica.

CONCLUSIÓN

Es dable concluir que la eficacia de la prueba ilícita se puede dar en cualquier momento, no sólo en la etapa intermedia, lo que hace que el juez deba garantizar dicha eficacia, así como los operadores del sistema tales como Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, etc. Pues al no velar por ello en el juicio, se podría caer en un acto de imposible reparación en una posible apelación, o hasta un Amparo Directo mismo que vendría a tirar todo lo desahogado en juicio o respecto de la prueba que resultó violatoria de derechos fundamentales, y si dicha prueba se concatenó con otras y fue base para sustentar un fallo condenatorio o absolutorio, como la teoría del árbol contaminado vendría a tirar todo el juicio, lo que garantizaría una ineficacia de velar por la prueba ilícita. Es por ello que el legislador toman-

do en cuenta estos elementos permite que en cualquier etapa del proceso se pueda analizar la eficacia y licitud de las pruebas, pues tanto el Juez de Control como el de Enjuiciamiento deben velar por la regularidad del proceso conforme a los Derechos Humanos y Tratados Internacionales concernientes a la prueba y al juicio.

Es por ello que, independientemente de la etapa intermedia, es necesario tener conocimiento de todas las etapas, así como los recursos que podemos utilizar en cada una de ellas, por lo que, a fin de evitar dilaciones y un mal juicio, debemos ser precavidos y darle la importancia requerida a la etapa intermedia, así como a su desahogo y admisión de las pruebas, pues es la antesala del juicio que nos puede beneficiar o perjudicar atendiendo al interés que representemos y al objetivo que pretendamos acreditar más allá de toda duda razonable.



ESTUDIA TU MAESTRÍA EN SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIOS PENALES ORALES

CUATRIMESTRAL RVOE 20150061

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO. RETOS A CORTO Y LARGO PLAZO



Dr. Víctor Amaury Simental Franco

Investigador Nacional SNI 1. Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la UNAM, Maestro y Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por el IPN. Catedrático en diversas instituciones privadas y públicas.

El derecho, entendido como el conjunto normativo que regula la conducta de la sociedad en un tiempo y espacio determinados, está afectado por los cambios que en la dinámica social se van suscitando. Nos toca vivir en las primeras décadas del siglo XXI una serie de transformaciones que superan las más ambiciosas proyecciones de los escritores de ciencia ficción: ciencia, tecnología, medio ambiente, cambio climático, organismos genéticamente modificados, el listado de todo lo que nos está pasando es casi interminable. Sin temor a exagerar es el periodo más cambiante en la historia de la humanidad y, a todo esto el derecho debe encontrar el modo de regularlo.

Enfocaremos este breve ensayo a los vínculos que se pueden dar entre inteligencia artificial (en adelante solo IA) y el derecho. Por IA podemos entender a los programas informáticos que pueden autocorregirse, autocompletarse, autocomplementarse y que, en apartados avanzados, pueden generar productos imposibles de diferenciar de aquellos creados directamente por un ser humano.

En estos momentos la IA que es accesible para la población puede responder cualquier pregunta de cultura general, puede entablar conversaciones inteligibles, puede crear canciones y videos, generar información y noticias, escribir ensayos, tomar fotografías,

y todo con base en datos reales o falsos, pero eso no es todo, además es prácticamente imposible de ser distinguido de una creación humana. Si de por sí antes era factible que una mentira surtiera efectos, hoy en día distinguir la verdad de lo falso es y será cada vez más difícil.

¿Y qué tiene que ver el derecho en todo esto? Pues, en principio, se verán afectados muchos derechos humanos: el derecho a la información, el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la veracidad de la información, a la originalidad de la creatividad, a todo lo concerniente a la propiedad intelectual.

Antonio Salgado resume respecto de la problemática en cuestión:

“ Lo que a nuestros sentidos se les viene entonces encima es un torrente de lo que algunos llaman hiperrealidad: un estado de cosas donde la información que nos llega en forma de simulaciones profundas, o

1 SALGADO BORGE, Antonio, "Inteligencia Artificial e hiperrealidad: ¿qué hacer cuando nada es lo que parece?", en *Aristegui Noticias*, 19 de abril de 2023, disponible en: <https://aristeginoticias.com/1904/opinion/inteligencia-artificial-e-hiperrealidad-que-hacer-cuando-nada-es-lo-que-parece/>

deepfakes, parecen igual o más reales que la que se desprende de contenidos que verdaderamente representan a la realidad misma.¹ ”

El hecho de que nuestros órganos legislativos no tomen con la debida importancia la problemática que ya se está presentando no significa en lo más mínimo que el tema se resuelva por sí solo; para nada es así. Es tanto como la actitud del avestruz que ante el peligro esconde la cabeza bajo tierra. Los litigios se avecinan (para quienes puedan costearlos), para el resto de la población sufrir y padecer lo que se viene, un mundo virtual, ilimitado, paralelo al mundo real; la ficción también será parte de la realidad. El riesgo social es escalofriante porque ahora deberá sumarse al peligro permanente de las drogas (que ya como pandemia, aún más mortal que el Covid, se vive en EE.UU.), que degenera a sus víctimas en zombies, ahora tendremos a esta virtualidad apoderándose de todo y de todos alrededor.

No es necesario avizorar el riesgo mayor y que ha motivado que grandes celebridades de la IA empiecen a tomar reservas de ella y que urgen a los gobiernos mundiales a legislar al respecto, que es en esencia que lo que se mostró como ficción en la serie fílmica de “Terminator” se vuelva realidad, que las máquinas tomen el control del planeta y que vean en nuestra especie el enemigo. No es una exageración, es mejor que demos inicio a la discusión de cómo darle un cauce jurídico a este serio problema y así evitemos que lo que nació como una gran oportunidad para el futuro de la humanidad se convierta en el destino final de nuestra especie.

En fin, con base en los principios plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y los Congresos estatales (dentro de sus respectivos ámbitos de competencia) deberán legislar para contar con un marco normativo que claramente determine las reglas que deberán seguirse en todos los campos en los cuales tendrá efectos la IA, entre otros, sin que el siguiente listado sea absoluto, se tendrá que normar en las materias:

- Administrativa
- Civil
- Mercantil
- Penal
- Propiedad intelectual
- Laboral

Sin menoscabo de ir pensando en el surgimiento de una nueva rama especializada: Derecho de la Inteligencia Artificial, que podría ser transversal al resto del orden jurídico.

México, en caso de poner atención a este serio problema, podría ser nuevamente el faro que ilumine la senda global, tal como en su momento lo hemos sido con el Juicio de Amparo, con el Derecho Laboral, con el Derecho Agrario y con el Derecho Ambiental, conceptos y ramas jurídicas que tuvieron en nuestro país su origen mundial.



LOS REGÍMENES ADUANEROS EN EL INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR

Dr. Zenén Miguel Cruz

Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM, la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y el Doctorado en Derecho en el CUEJ. Se ha desempeñado como funcionario público en diversas ocasiones: en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa y Magdalena Contreras, la Administración General de Aduanas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Actualmente tiene el cargo de Director en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo es profesor del CUEJ.



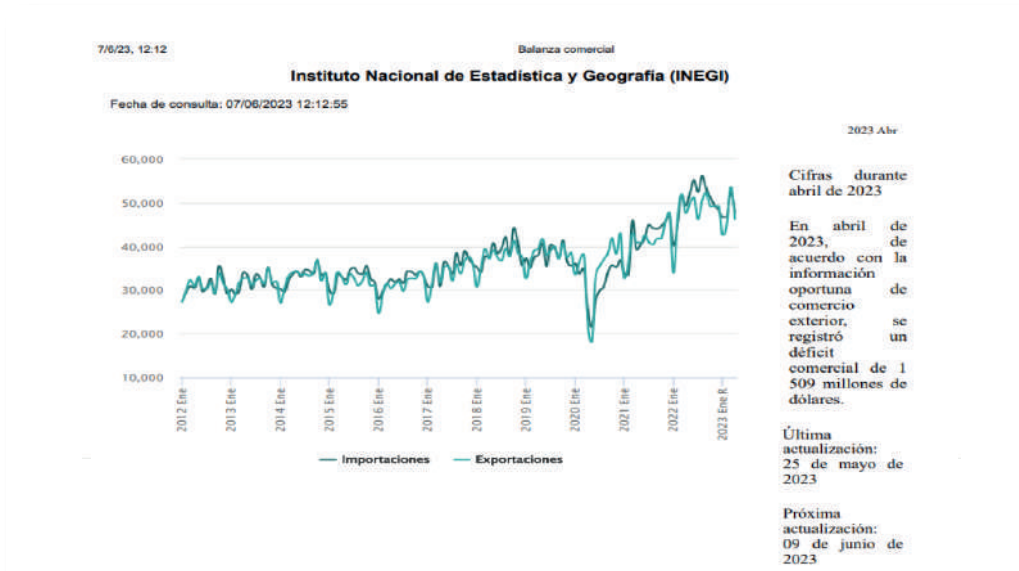
México tiene sectores que importan mercancías, así como empresas que exportan los productos mexicanos a otros países, lo que genera trascendencia en la sociedad y economía nacional, pues no sólo se da el intercambio de productos, sino que también genera atracción a la inversión extranjera, contribuciones para el gasto público, protección a la seguridad nacional, al medio ambiente, el campo, la salud, entre otros.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica que, en lo que va del año 2023, las exportaciones totales son de 494 mil 224.5 millones de dólares y de importaciones totales 505,715.6 millones de dólares.¹

Para que se ingresen o extraigan estas mercancías, se tiene que cumplir con determinadas obligaciones, actos y formalidades, a fin de que ese ingreso, estancia o salida cumpla con las disposiciones legales y las mercancías tengan el fin que se pretende para ellas.

El destino de las mercancías es relevante para el cumplimiento de las obligaciones, al respecto la Ley Aduanera señala lo siguiente:

ARTÍCULO 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros(...).²



¹ INEGI, Balanza comercial, en <https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/>

² Ley Aduanera, artículo 90, en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAdua.pdf>

En estas circunstancias, el destino de las mercancías desde la legislación aduanera constituye los regímenes aduaneros de las mismas: definitivos, temporales, de depósito fiscal, de tránsito, para elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico que, a su vez, se particularizan de la siguiente manera:

- A)** De importación definitiva
- B)** De exportación definitiva
- C)** De importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado
- D)** De importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación
- E)** De exportación para retornar al país en el mismo estado
- F)** De exportación para elaboración, transformación o reparación
- G)** De depósito fiscal
- H)** De tránsito interno
- I)** De tránsito internacional
- J)** De elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y
- K)** De recinto fiscalizado estratégico

De alguno de éstos se habrá de elegir el que se pretende para las mercancías y notificárselo a la autoridad aduanera, a través del pedimento aduanero:

“ La declaración en documento electrónico, generada y transmitida

respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables.”³

Y a través de un agente aduanal, una agencia aduanal o un representante legal aduanero, previstos en los artículos 40, 159 y 167-D de la Ley Aduanera.

Por ello, quien pretenda el comercio de mercancías de comercio exterior, previamente a ingresarlas o extraerlas al o del territorio nacional, tiene que enfocarse en ver qué régimen le es *ad hoc* a las mercancías, de acuerdo con su modelo de negocio:

ARTÍCULO 91. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán señalar en el pedimento el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias.⁴

- El régimen de *importación definitiva* se traduce en ingresar mercancías de procedencia extranjera a nuestro país para permanecer en él por tiempo ilimitado, como los autos, la gasolina, alimentos, que se importan para ser comercializados o consumidos.
- El de *exportación definitiva* consiste en el envío de productos de nuestro país para que se usen o consuman en el extranjero, como el tequila, los aguacates, las artesanías mexicanas, entre otros.

³ Ídem.

⁴ Ídem.

- El *de importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado* aplica para mercancías que ingresan a territorio nacional para permanecer por un tiempo limitado y con una finalidad específica. El tiempo de estancia de las mercancías va de hasta un mes, hasta seis meses, hasta un año, por el plazo que dure su estancia, hasta por diez años, de acuerdo con el tipo y fin de la mercancía.

- El *de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación*, refiere a aquellos productos que ingresan y que de alguna manera van a ser ocupados para elaborar un producto final, transformados en otros o reparados, para ello el importador deberá cumplir con los requisitos exigibles en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación y autorizarse ante la Secretaría de Economía.

Muchos artículos que usamos como muebles, radios, televisores, computadoras, cuadernos, plumas, entre otros, tienen un proceso de elaboración, transformación o reparación.

Las mercancías que se importen para estos efectos pueden estar en el país hasta por dieciocho meses, hasta por dos años o por la vigencia del programa autorizado.

- El *de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado*, se ocupa de las mercancías nacionales o nacionalizadas que salen del país para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin cambio alguno hasta por un plazo de tres meses, hasta por seis meses, hasta por un año, o por el periodo que mediante reglas determine la autoridad y por las mercancías que se señalen.
- El *de exportación temporal para elaboración, transformación o reparación*, resulta cuando las mercancías salen de nuestro país precisamente para tener un cambio y regresar, contando para ello con un plazo de hasta dos años.
- El *de depósito fiscal* permite que las mercancías se almacenen de manera temporal (hasta veinticuatro meses) en un almacén general autorizado por la autoridad en términos de la

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y, derivado de ello, darle otro régimen aduanero.

- El *de tránsito interno de mercancías*, se da cuando se trasladan las mercancías bajo control de la autoridad de una aduana a otra, para su importación, exportación o retorno al extranjero.
- El *de tránsito internacional de mercancías* también es un traslado controlado de las mercancías, cuando la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero, o cuando las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional.

Para ello, la autoridad aduanera establece en los anexos de las Reglas Generales de Comercio Exterior plazos y rutas por las que los transportistas deberán efectuar su recorrido con estas mercancías.

- El *régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado* consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales, precisamente para con otro producto elaborar uno final, o el mismo producto transformarlo o repararlo, para entonces ser retornadas al extranjero o ser exportadas, respectivamente.
- Y el *régimen de recinto fiscalizado estratégico* se da con la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a esos recintos para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.

Así pues, quien pretenda el ingreso de mercancías de comercio exterior en nuestro país o llevar las nuestras al extranjero, previamente tendrá que determinar el fin que pretende para esas mercancías, a fin de revisar y cumplir con los actos, trámites, formalidades, restricciones y regulaciones no arancelarias que se requieran y que se pueden conocer con el régimen aduanero de las mismas.

No es lo mismo una importación definitiva que una importación temporal, o para elaboración, transformación o reparación, por ejemplo, de ahí que, en el

modelo del ingreso o salida de las mercancías de nuestro país, resulta uno de los primeros pasos el tener claridad en el destino de ellas.

Conviene señalar también que, en términos del artículo 93 de la Ley Aduanera, es posible desistirse de un régimen siempre y cuando no se haya activado el mecanismo de selección automatizado y retornar al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional:

ARTÍCULO 93. El desistimiento de un régimen aduanero procederá hasta antes de que se active el mecanismo de selección automatizado y en los casos a que se refiere la fracción III del artículo 120 de esta Ley.

Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas de tráfico aéreo o marítimo, el desistimiento a que se refiere este artículo procederá inclusive después de que se haya activado el mecanismo de selección automatizado. En este caso se podrá permitir el tránsito de las mercancías a una aduana distinta o a un almacén para su depósito fiscal.

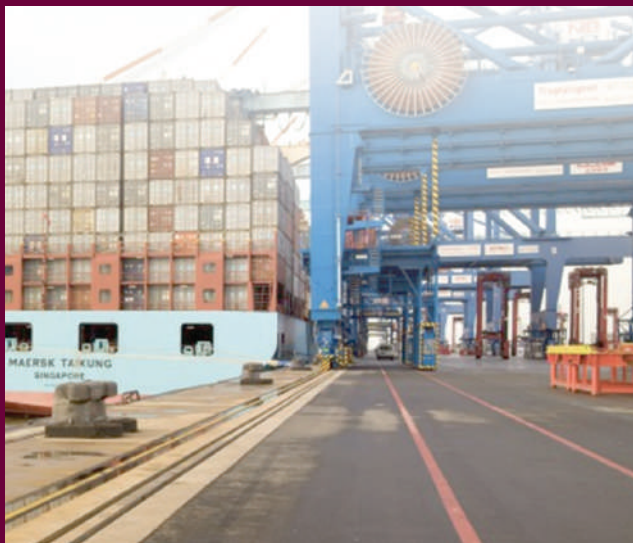
El cambio de régimen aduanero procederá siempre que se paguen las contribuciones y las cuotas compensatorias, según corresponda, las regulaciones y restricciones no arancelarias y los precios estimados exigibles, para el nuevo régimen solicitado en la fecha de cambio de régimen.⁵

Incluso, procede el retorno al extranjero de mercancías en depósito ante la aduana también hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizado, en caso de que:

- I. Se trate de mercancías de importación prohibida.
- II. De armas o de sustancias nocivas para la salud.
- III. Existan créditos fiscales insolutos.

Precisando que el mecanismo viene a ser: “Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que determinará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero”.⁶

En conclusión, resulta de suma importancia que, previamente al ingreso, tránsito, estancia o salida de las mercancías de comercio exterior al o de nuestro país, se clarifique el régimen aduanero a fin de conocer las obligaciones, los actos, trámites y formalidades que habrán de cumplirse, así como los beneficios y derechos que se tienen, para así cumplir con éxito el proyecto de negocio que se pretenda.



⁵ *Idem.*

⁶ *Idem.*

JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA

DERECHO
ADUANERO MEXICANO



DERECHO ADUANERO MEXICANO

5ta. Edición

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García



EDITORIAL
PORRÚA

ecex
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS



DIPLOMADOS 100% EN LÍNEA



**Diplomado: Juicio Contencioso y
Recurso de Revocación**



**Diplomado:
IVA: Impuesto al Valor Agregado**



**Diplomado:
Derechos Humanos y Amparo en
Materia Administrativa**



**Diplomado:
ISR: Personas Físicas**



**Diplomado:
Derecho Aduanero**

SOLICITA FECHAS DE INICIO
cursos@cuej.edu.mx

WHATSAPP
55 10815944

LAS FAMILIAS MULTIESPECIE O INTERESPECIE EN EL MARCO JURÍDICO ACTUAL DEL DERECHO FAMILIAR MEXICANO Y SU EVOLUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL



Lic. Berenice Álvarez López

Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), abogada postulante en Derecho Civil y Familiar en el despacho jurídico "Donis Buendía Abogados"

El presente artículo abordará el tema del reconocimiento de las familias multiespecie o interespecie en el derecho positivo mexicano así como su evolución en el ámbito jurídico internacional y las expectativas a futuro en la protección integral de los derechos de los animales no humanos que forman parte de una familia.

El reconocimiento de la familia, como la columna vertebral de la sociedad, ha tenido una evolución en su composición a lo largo de la historia y, por supuesto, en el reconocimiento jurídico de sus derechos y obligaciones entre sus integrantes. El concepto actual de familia ya no encuentra su base en el matrimonio ni en la pareja heterosexual, ni siquiera en una pareja (la familia puede ser unipersonal); se relativiza el peso del orden público en favor de la autonomía de la voluntad de los individuos que integran las familias; no está definida necesariamente por lazos de sangre, ni siquiera de parentesco, sino por lazos de afectividad: se trata de una familia basada en relaciones socioafectivas.¹

Con base en la idea anterior, la "familia multiespecie o interespecie" se puede definir como aquel lazo socioafectivo que vincula a animales humanos y no humanos, donde los primeros asumen de forma libre y voluntaria funciones de cuidado parental con los segundos.

El problema actual al que se enfrentan este tipo de familias es que los andamiajes jurídicos donde se codifican las leyes familiares aún se encuentran en el camino de reconocer los derechos y obligaciones que nacen entre sus miembros. El propio reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho en un constructo jurídico que los vincule a todas las áreas del derecho aún se encuentra en construcción y discusión en varias partes del mundo. Esto evidencia, una vez más, que la realidad social rebasa al derecho en algún momento de la historia; por lo que es necesario crear normas jurídicas que reconozcan y regulen las formas de convivencia que surgen con la evolución de nuestra vida en sociedad.

Ahora bien, esta familia debe entenderse desde un plano de equidad entre sus miembros, es decir, la tutela no debe orientarse como un ejercicio de poder y dominación hacia los integrantes no humanos, se debe dejar el pensamiento utilitarista y especista que hoy día representan los principales obstáculos a vencer para una debida consagración de los derechos de los no humanos a efecto de dignificarlos.

Resulta adecuado explicar el paradigma del "interés

¹ HERRERA, Marisa y SALITURI AMEZCUA, Martina, "El derecho de las familias desde y en perspectiva de géneros", en *Rev. Derecho* [online], 2018, n. 49, pp. 42-75. ISSN 0121-8697.

superior animal” o “mejor interés animal” que guarda una similitud con el término utilizado en el common law “*best interests*” y ha sido ya utilizado en algunos fallos a favor de las familias multiespecies; un claro ejemplo donde se permeó el llamado “*best interests*” para dirimir una controversia de un animal no humano fue el caso *Susan Raymond v. Suzanne Lachmann*² en Nueva York, Estados Unidos, donde dos compañeros de piso litigaron la custodia de un gato y la Corte determinó que debía “permanecer donde había vivido, prosperado y se le había amado durante los últimos cuatro años” permeando su “mejor interés animal”. Otro ejemplo lo fue *Travis v Murray*³ que trató de la disputa por la custodia de un perro en un caso de divorcio, en este fallo la corte aplica un análisis del caso desde la perspectiva de que “los perros son vistos como miembros de la familia” aplicando en su fallo el principio “*best interests*”.

En Latinoamérica y Europa también se tienen fallos interesantes donde se protege y reconoce los derechos y obligaciones inherentes a este tipo de familias, tal es el caso de Argentina, un país que cada día evoluciona más en el derecho de los animales no humanos, el caso *Popeye y Kiara*⁴ sobre los cuales sus responsables al divorciarse establecieron un convenio regulador⁵ en beneficio de sus dos perros, el cual debía contener cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y por supuesto la prestación alimentaria. En el mismo país se tiene el caso *Sidney*⁶, donde una pareja de concubinos decide separarse y vía judicial se estableció un “régimen de comunicación” (en nuestro ordenamiento jurídico se refiere a visitas y convivencias) desde la óptica del “interés animal”.

En España se tiene el fallo “*Cachas*” (sentencia 88/2019 del Juzgado nº 9 de Valladolid) donde una pareja, al separarse, comenzó a litigar la tenencia de un canino llegando al fallo de una “posesión compartida” (en nuestro ordenamiento custodia compartida) entre ambos responsables.

En Chile también se tienen fallos emblemáticos, tal es el caso de “*Igor y Bambú*” (causa rol 1.533-2021)⁷ donde una pareja litigó la custodia de dos caninos y

se resolvió una tenencia compartida en periodos de tres meses.

En nuestro país, el pasado 16 de junio de 2023 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la siguiente Tesis con registro digital 2026798 bajo el título siguiente:

FAMILIA MULTIESPECIE O INTERESPECIE. AL ESTAR RECONOCIDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, APARTADO B, PUNTOS 1, 2 Y 3, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS GIROS MERCANTILES DE ALBERGUE Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE VIVEN EN LOS HOGARES COMO PARTE INTEGRANTE DE ESE TIPO DE FAMILIA, SE DEBEN CONSIDERAR DE BAJO IMPACTO, CONFORME A LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES LOCAL.

Esta tesis es el resultado del Amparo directo 454/2021 y constituye un importante precedente en nuestro ordenamiento jurídico, pues en ella se reconoce a la “FAMILIA MULTIESPECIE O INTERESPECIE” y se adminicula a otros ámbitos jurídicos como lo son los giros mercantiles dedicados al albergue y cuidado de los animales no humanos que integran este tipo de familias. Lo anterior abre el paradigma hacia una tutela efectiva de este nuevo modelo familiar.

No obstante, en México nos hace falta recorrer un largo camino para desarrollar constructos jurídicos efectivos que protejan eficazmente los derechos que se crean alrededor de una familia interespecie, es una realidad que existen vacíos legales importantes que hacen difícil dirimir una controversia en torno a los animales no humanos, así como a reconocerles y respetarles derechos que emanen de la familia que decidió incorporarlos como un miembro más que estará bajo su tutela y responsabilidad durante toda su vida. Un vínculo socioafectivo familiar interespecie

2 Casetext: Smarter Legal Research, *Raymond v. Lachmann* [1st Dept 1999], en <https://casetext.com/case/raymond-v-lachmann-1st-dept-1999>

3 “*Travis v Murray*” en https://www.nycourts.gov/REPORTER/3dseries/2013/2013_23405.htm

4 SAJ, M. E. R. c/ B. A. B. D. C. s/ divorcio por presentación conjunta, SENTENCIA, 26 de Septiembre de 2022, JUZGADO DE FAMILIA NRO 6. SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, en <http://www.saj.gov.ar/juzgado-familia-nro-6-local-buenos-aires--divorcio-presentacion-conjunta-fa22010062-2022-09-26/123456789-260-0102-2ots-eupmocsollaf>

5 Código Civil y Comercial Nacional, Artículo 439. Convenio regulador. Contenido

6 Cámara Civil – Sala J, Expte. N°46.270/2018 “P, R.M c/ R, B. B s/ RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN

7 Disponible en <https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/getRulingNew/18243>

reconocido por la ley debe amparar el acceso a derechos básicos: una pensión alimenticia, un régimen de visitas y convivencias, una guarda y custodia, por ejemplo; y de la misma manera debe reconocerse su incorporación frente a terceros.

En los últimos meses hemos sido testigos de violencia, maltrato y crueldad animal, tal es el caso de la terrible muerte del perro Scooby al ser lanzado a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México, hecho que quedó grabado en cámara ese momento. Esto evidencia el grave problema de educación y de resistencia al reconocimiento del valor intrínseco de todos los seres sintientes y al respeto de su dignidad.

En todo el mundo han surgido, cada vez con mayor frecuencia, necesidades legislativas a efecto de lograr la inclusión efectiva de la familia multiespecie y el reconocimiento de los derechos y obligaciones entre sus integrantes. El reto para crear constructos legales efectivos será alejarnos de la vieja hermenéutica civilista y hacer un reconocimiento objetivo desde dos diferentes ópticas: la humana y su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y la no humana desde el “interés superior animal”.



LA DIALÉCTICA EN PLATÓN

S. Sofía Cisneros Grosso

Estudiante de Filosofía en la FFyL, UNAM. Estudiante de Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.



El presente texto tiene el propósito de esclarecer el concepto de dialéctica (**διαλεκτική**) en el filósofo ateniense Aristocles, mejor conocido como Platón, subrayando la transformación que tiene esta palabra en dos periodos de la obra del filósofo griego: en los diálogos de juventud con una fuerte inclinación socrática y en los diálogos de madurez como una propuesta ya desarrollada. El motivo por el cual se decide estudiar este tema es sencillo: la dialéctica es un concepto que acompaña toda la tradición filosófica hasta nuestros días con la hermenéutica contemporánea, pero, además, la dialéctica siempre nos recuerda que el proceso del conocimiento es un proceso de diálogo, un diálogo que necesita a un otro para llegar a ese **lógos**¹ (razón, palabra, principio). Y esto último no se reduce a la filosofía, sino que aplica para todas las disciplinas y ciencias.

En los diálogos socráticos podemos observar a un joven Platón que intenta preservar la memoria de su maestro, Sócrates, quien no dejó ningún escrito debido a que creía en el poder de la palabra viva: la hablada², creencia que lo impulsó a salir a las calles atenienses a discutir diversos temas con las personas que se decían especialistas en aquellos, para que, mediante una serie de preguntas y sus clásicos toques de ironía, Sócrates les hiciera advertir su ignorancia sobre lo que decían conocer. Este método, muy simple para Sócrates, de dialogar con los demás sobre determinados conceptos para luego ponerlos en duda y darse cuenta

de que las definiciones obtenidas no resultaban satisfactorias, despertó un gran interés en Platón, que quiso recuperar este sencillo modo de proceder de su maestro, para después formalizarlo y usarlo en su propia forma de escribir y sus propias teorías.

En el Diálogo **Menón** se aprecia con claridad este proceso. El joven tesalio, llamado Menón, quiere saber si la virtud es enseñable o no, pero Sócrates le advierte que antes de investigar eso, sería recomendable examinar qué es la virtud en sí misma, es decir, buscando su definición. Pero Menón lejos de brindar una definición, da un listado de virtudes, a lo que Sócrates le exige buscar la esencia, lo que es común en esas virtudes; más ante la incapacidad de Menón para resolver la cuestión, empieza a objetar a las preguntas guía de Sócrates, quien responde que él no busca como los erísticos³ causar controversias y examinar argumentos únicamente con el fin de refutarlos, a modo de ganar una discusión, sino que es necesario conducir dialécticamente la discusión, esto es, con calma y con el objetivo de ayudarse mutuamente para resolver la cuestión.

De lo anterior, se observa que Sócrates advertía en la dialéctica no sólo una manera para refutar argumentos, sino como una vía para conocer y, aunque bien se podría objetar que en realidad no se llegaba a nada porque estos diálogos usualmente concluían en la aporía⁴, se debe considerar que ya es una ganancia en

1 *Lógos* tiene múltiples acepciones. Se recomienda consultar el término en el *Diccionario de filosofía* de José Ferrater Mora.

2 XIRAU, Ramón, *Introducción a la historia de la filosofía*, México, UNAM, 2017, pp. 46-48.

3 Los erísticos podrían, de cierto modo, ser equivalentes a los sofistas.

4 Los diálogos socráticos son característicos porque al final no se puede resolver los problemas que desde el inicio se plantearon y quedan "inconclusos".

el conocimiento el dismantelar las falsedades que aparecen como verdades⁵, pero que son pura **doxa** infundamentada (opinión). Por otra parte, quizá el único conocimiento que se adquiere inmediatamente del proceso mayéutico es al que famosamente alude Sócrates, el de la ignorancia del ser humano y su incapacidad de llegar a la verdad, que está reservada exclusivamente para los dioses.

Frente a esta primera etapa, en la fase de madurez Platón introduce conceptos clave para resolver sus inquietudes filosóficas y desarrollar el proceso crítico para alcanzar el conocimiento (la dialéctica).

En el *Fedro*, Fedro le muestra a Sócrates un discurso escrito por Lisias⁶, donde la principal tesis es que hay que tratar mejor a los que no están enamorados, que a los que lo están, porque los enamorados son insensatos. Ante esta tesis, Sócrates se propone pronunciar un mejor discurso sobre el Amor, en el cual se alaba al amor (porque *Eros* es un dios y, por lo tanto, no puede ser malo) y se manifiesta la importancia que tiene el amor en el proceso de conocer.

Es aquí donde se hace explícito el método dialéctico de una forma más sistemática, pues Sócrates empieza poniendo como género el tema que se discute (la irracionalidad del amor) y después lo divide en especies (de acuerdo a su origen: humano o divino) y éstas a su vez las subdivide (tipos de posesiones divinas), para identificar al Amor en la categoría adecuada y concluir que el amor (divino) es bueno.⁷ Así, se expone la dialéctica como un doble procedimiento donde:

a) el primer procedimiento consiste en recoger una multiplicidad de cosas que nos brinda la experiencia en una única idea, a fin de definir la cosa sobre la cual

se quiere hablar o escribir; b) el segundo consiste en examinar la idea obtenida mediante el primer procedimiento, individualizar sus articulaciones y dividirla según las mismas, hasta alcanzar las ideas singulares ya no divisibles.⁸

Entonces, el filósofo griego señala que quienes sigan este método son dialécticos, y ellos son los únicos capaces de hablar y pensar correctamente, por medio de las divisiones y uniones de conceptos.⁹ Los filósofos, por su forma de proceder, son los auténticos dialécticos.

Sin embargo, se suscita la pregunta ¿Qué ocurre con otras formas discursivas? ¿Acaso la retórica no es valiosa? Sobre esto Sócrates precisa que la retórica sólo puede ser un arte si lo dicho se basa en un conocimiento verdadero y no sólo en lo verosímil que persuade al público; ya que es importante que el discurso se haga correctamente bajo ciertas reglas para que éste pueda guiar las almas de los oyentes; éstas son extraídas del proceso dialéctico, por lo cual sólo el filósofo puede ser un rétor con arte si es primero dialéctico.¹⁰

Por otra parte, sobre los discursos escritos, Fedro pregunta a Sócrates qué necesita la escritura para que sea un arte, a lo que Sócrates argumenta que el valor de la escritura frente a la palabra oral es nulo, pues la palabra viva puede defenderse y, sólo mediante la oralidad dialéctica pueden comunicarse de manera adecuada las ideas, porque aunque ésta no escriba en hojas, sí lo hace en el alma de los hombres.

Es así como Platón, por boca de Sócrates, afirma insistentemente que la oralidad dialéctica es la herramienta irrenunciable del filósofo¹¹, pues “(...) la filosofía sólo puede practicarse por medio de la discusión verbal y de una vida compartida (...)”.¹² Éste es el único método

5 GUTHRIE, W. K. C., *Historia de la filosofía griega. Platón. El hombre y sus diálogos: primera época.*, tr. Alvaro Vallejo Campos y Alberto Medina González, Madrid, Gredos, 1998, p. 236.

6 Orador griego.

7 GUTHRIE, W. K. C., *op. cit.*, p. 392.

8 REALE, Giovanni, Platón. *En búsqueda de la sabiduría secreta.*, tr. Roberto Heraldo Bernet, p. 111.

9 PLATÓN, *Fedro*, 266b-c, en *Diálogos I*, tr. Julio Calonge Ruiz, Emilio Lledó Iñigo, Carlos García Gual, Emilio Acosta Méndez, Francisco José Olivieri, José Luis Calvo y Marcos Martínez Hernández, Madrid, Gredos, 2010.

10 LESKY, Albin, *Historia de la literatura griega. De Platón a la época imperial.*, tr. José Ma. Díaz Regañón y Beatriz Romero, Madrid, Gredos, 2010, p. 50.

11 REALE, Giovanni, *op. cit.*, p. 95.

12 GUTHRIE, W. K. C., *op. cit.*, p. 63.

que guía al conocimiento porque, aunque éste ya se tiene en nuestra alma que lo ha visto todo, se debe mediante la reflexión revelar “aquello que ya sabemos y que nuestra vida sensible nos hace olvidar”.¹³ No obstante, se reitera la imposibilidad de arribar aislados al conocimiento, necesitamos el diálogo y su método, que tenga como objetivo la búsqueda común de la verdad, con el gran impulso del Amor, pues la filosofía -amor al saber- requiere este conocer amante implacable en la búsqueda de conocer la verdad de las cosas, y a su vez la verdad del ser.¹⁴

Por consiguiente, podemos concluir que en la obra de Platón la dialéctica es la herramienta fundamental para aquél que quiera conocer en verdad algo y que, aunque se despliegue en un método mucho más sistemático como en *Fedro* o en diálogos posteriores, su forma esencial siempre será el diálogo sincero con un otro que también quiere conocer.



¹³ XIRAU, Ramón, *op. cit.*, p. 60. Por la extensión del texto no se desarrolla aquí la teoría de las ideas ni de la inmortalidad del alma en Platón.

¹⁴ GUTHRIE, W. K. C., *op. cit.*, p. 249.

ESTUDIA TU MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

CUATRIMESTRAL RVOE 20211644

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX





CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR

Dra. Wendy Aide Godinez Mendez

Wendy Aide Godinez Mendez es Doctora en Derecho por la UNAM, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y SNI nivel I por el CONAHCYT.



Dr. Lawrence Salomé Flores Ayvar

Lawrence Salomé Flores Ayvar es Doctor en Derecho por la UNAM, profesor de la misma Universidad y candidato al SNI por el CONAHCYT.

El presente artículo es parte de un texto de mayor profundidad y sólo pretende mostrar como paradigma al constitucionalismo transformador. Pues al ser uno de sus objetivos y comisión de los jueces constitucionales está focalizado en dismantelar la discriminación sistémica hasta lograr la igualdad sustantiva, en la cual no debe pasar desapercibida la valoración de las diferencias para conceder mayor consideración a quien más la requiere, acorde a sus necesidades.

CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR

El constitucionalismo transformador es

“ el modelo de Estado constitucional que busca el cambio de un statu quo considerado injusto, a través de la

actuación estatal consciente y guiada por las normas constitucionales [...], cuya característica principal es que las constituciones transformadoras buscan romper con una historia autoritaria, racista y clasista, y proclaman contenidos que son sociales, redistributivos, participativos horizontales y multiculturales, presentándose como modelos ~~autoconscientes~~ de su posición histórica y de su misión transformadora.¹ ”

¹ GARCÍA SARUBBI, David, “¿Existe un constitucionalismo transformador en México? Una reflexión a partir de las sentencias del matrimonio igualitario”, en SOTELO GUTIÉRREZ, Arturo (coord.), *El matrimonio igualitario desde el activismo, la academia y la justicia constitucional*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, pp. 75-76.

Un *statu quo* inerte invisibiliza a los desfavorecidos, desatiende las precariedades sociales singulares y pluralistas en situaciones análogas, al tener una mirada fija en auspiciar los intereses privados de las *élites* capitalistas quienes se han posicionado en las altas esferas económicas y políticas debido al influjo de poder. La inconmensurable acumulación de riqueza de la minoría elitista es proporcional a las injusticias de la mayoría de los desfavorecidos, contrastada en las condiciones de vida socioeconómica asolada de la última respecto de la primera.

Giacomelli aduce que

[...] el constitucionalismo transformador sería aquel que ve en los valores y principios constitucionales la herramienta para romper la desigualdad y la injusticia social. El pacto constitucional, entonces, es concebido como una “promesa de cambio” e “inversión jurídica de una concreta esperanza”, [...] con el signo de una transformación continua que se desarrolla en clave correctivo-retrospectiva, para sanar las heridas del pasado, pero, sobre todo, en clave proactiva, sirviendo de puente hacia un futuro mejor.²

Este modelo contemporáneo está llamado a romper con las barreras que discriminan en razón de diferencias innatas o circunstanciales y a fortalecer la igualdad sustantiva como promesa de cambio, reflejada en la vida material de las personas, de tal manera que haya elocuencia entre lo plasmado en las Cartas Fundamentales con la justicia social demandada por los grupos vulnerables discriminados durante siglos.

Dicha demanda anhela que los derechos de los excluidos se garanticen conforme a la “igualdad política referente a que los miembros más débiles de una comunidad política tienen derecho, por parte del gobierno, a la misma consideración y el mismo respeto que se han asegurado para sí a los miembros más poderosos”.³ A través de medidas temporales o permanentes que allanen el camino hacia condiciones más justas y equitativas, en las cuales no se justifique los privilegios de las minorías selectas, de tal suerte que alcancen su plenitud de todos conforme a sus diferencias.

El cambio debe ser tal que “surja sorprendentemente desde el ámbito estatal un profundo interés por calibrar la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos en su vida cotidiana”.⁴ La tarea integral del Estado radica en “no sólo tratar a la gente con consideración y respeto, sino con igual consideración y respeto. No debe distribuir bienes u oportunidades de manera desigual [...]”.⁵ Para una distribución equitativa se examina, a lo que Rawls llamó, las desventajas naturales, así como las económicas de los dos estratos sociales: la opulencia de la minoría selecta y la pobreza de la mayoría de los desfavorecidos, necesaria para el cambio.

La dogmática del cambio es mal vista por la injerencia de competencias. Sin embargo, su misión democrática consiste en alinear los poderes en favor del bien común

[...] desde la cual habrá de juzgarse las desigualdades económicas y sociales de la estructura básica, donde se establezcan la libertad igual y la justa igualdad de oportunidades, en ésta las expectativas más elevadas de quienes están mejor situados sean justas sí y sólo si funcionan como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros menos favorecidos de la sociedad.⁶

Según Christiansen, un

constitucionalismo transformador como el sudafricano, el tribunal constitucional se le considera el primero entre pares, al ser el máximo intérprete de esos compromisos transformadores convertidos en norma jurídica, quien a través de su jurisprudencia guía la dirección del sentido de transformación del *statu quo*.⁷

De lo anterior se advierte como pionero de este modelo al tribunal constitucional de Sudáfrica, el primero en desafiar el sistema basado en la estigmatización tradicionalista al resolver casos emblemáticos. Así, es el caso que:

En 2005, al resolver el caso *Fourie & Another v Minister of Home Affairs & Another*, dicho Tribunal reiteró

2 AGUILAR CAVALLÓ, Gonzalo, “Los derechos sociales y el constitucionalismo transformador en Chile”, *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Brazilian Journal of Public Policy. Constitucionalismo transformador: lus Constitutionale Commune na América Latina., vol. 11, n. 2, agosto. Brasília, 2011, p. 253.

3 DWORKIN, Ronald, *Los derechos en serio*, 2ª ed., España, Arie S.A, 1989, p.295.

4 ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Javier y Jorge Ordoñez (coord.), *Los derechos sociales en el Estado Constitucional*, Tirant lo blanch, México, 2013, p. 276.

5 DWORKIN, Ronald, *op. cit.*, p. 389.

6 Cfr. RAWLS, John, *Teoría de Justicia*, 2ª ed., trad. de Ana María Dolores Gonzales, USA Mass., Harvard University Press, Cambridge, 1995, pp. 80-81.

7 GARCÍA SARUBBI, David, *op. cit.*, p. 78. 8 *Ibidem*, p. 86.

lo que ya no era noticia, que la exclusión de las demandantes (una pareja del mismo sexo) era inconstitucional, por lo que debía otorgárseles la protección judicial. Lo relevante, sin embargo, fue el diseño de la medida de reparación decretada. En lugar de ordenar a los Jueces a leer en la ley la inclusión de los peticionarios para poder solicitar el reconocimiento de su matrimonio, determinó que siendo la ley inconstitucional, debían otorgarse 12 meses al legislador para que arreglara los defectos constitucionales de su legislación —y, por tanto, ordenó la suspensión de su sentencia para el caso concreto judicial hasta en tanto el legislador actuara. [...] Así, en *Fourie*, la Corte determinó que la protección de la igualdad era una responsabilidad principalmente legislativa y que había llegado el momento de vincular al Poder Legislativo [...].⁸

El caso resuelto por el Tribunal de Sudáfrica en el año 2005, que es un hito del constitucionalismo contemporáneo en pleno siglo XXI, en vista de la gran trascendencia, figura en nuestros días como parteaguas en las resoluciones de las subsecuentes sentencias no sólo de ese Estado, sino también a nivel internacional. Este caso es conocido por vincular los efectos de la sentencia con el poder legislativo y no únicamente con los jueces del poder judicial involucrados en dicho caso.

La resolución de la Corte de Sudáfrica es de gran relevancia porque los efectos de la sentencia mutaron al confluir en una responsabilidad bipartita: entre el poder judicial y el poder legislativo al sujetar el cumplimiento de la obligación de la Corte hasta en tanto el legislativo no cumpliera previamente con la reforma, porque los tribunales no crean la norma. La Corte, mediante la interacción entre estos poderes, cumplió con uno de los objetivos de esta teoría: inhibió la desigualdad vertida en la norma y reparó la violación de los derechos de los peticionarios.

De lo mencionado, podemos decir a modo de cierre que, dentro de los objetivos primordiales de este modelo transformador, “promueve la plena realización de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en un contexto de pobreza y exclusión social. Asimismo, pretende contribuir a la construcción de sociedades que sean más plurales y al mismo tiempo más cohesionadas”.⁹ Lo cual es posible emprenderse con la sinergia [...] de la actividad legislativa, ejecutiva y jurisdiccional en el pleno goce de los derechos sociales *lato sensu*, que pavimenta el camino para un proceso de cambio social, [...] hacia una comunidad integrada, [...] inclusiva, donde nadie queda atrás.¹⁰

Sólo si el poder estatal se subordina a los textos constitucionales, que está a merced de los derechos fundamentales, se incentiva la armonización de los medios con el reconocimiento de los derechos humanos en un plano horizontal porque “en caso de omisión del legislador la Administración o los tribunales de justicia han de conceder directamente el mínimo de los derechos fundamentales”.¹¹ En cumplimiento con la reparación cabal de las omisiones, compromiso firme e impostergable para coadyuvar e incidir en la materialización de estos derechos.

El compromiso estriba en

la igual valoración jurídica de las diferencias, basado en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales —políticos, civiles, de libertad y sociales— y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar [...] a todos su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolas al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndolas objeto de esas leyes de los más débiles que son los derechos fundamentales.¹²

Las diferencias deben concurrir a remediar las necesidades del débil vulnerable.

9 VON BOGDADY, Armin, SALAZAR URGARTE, Pedro, *et al.*, *El constitucionalismo transformador en América Latina y el Derecho Económico Internacional*. De la tensión al diálogo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, 2018, p. 13.

10 AGUILAR CAVALLÓ, Gonzalo, *op. cit.*, p. 256.

11 GRIMM, Dieter, *Constitucionalismo y Derechos Fundamentales*, Trotta, Madrid, 2006, p. 172.

12 FERRAJOLI, L., *Derecho y garantías. La ley del más débil*, 4ª ed., trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2004, pp. 74-75.

DR. CARLOS MUÑOZ VILLAVICENCIO

MANUAL PRÁCTICO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA



Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com



GRUPO DACIS



Oficinas:

Ciudad de México
AICM
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Nuevo Laredo
Veracruz
Tijuana
Colombia
Ciudad Juárez
China
España



Patentes:

1717
1748
3751
3439



El comercio exterior necesita soluciones integrales, disponibles en cualquier momento. En **GRUPO DACIS** lo sabemos, y por esa razón estamos comprometidos a atender tus necesidades.

Proporcionamos soluciones para **importar y exportar** tu mercancía, nuestro objetivo principal es optimizar tus procesos y ahorrar recursos, por ello te ofrecemos un sistema integral de logística, almacenamiento y despacho aduanal.

 www.dacis.com.mx

contacto@dacis.mx
(55) 5341 4041 | (55) 6650 6454

Begonias #18, Col Clavería, Alcaldía Azcapotzalco,
CDMX C.P. 02080.

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA EN EL PENSAMIENTO DE NICOLÁS MAQUIAVELO

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Doctor en Derecho. Profesor por oposición a la cátedra de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Pontificia de México. Miembro del Claustro de Profesores del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Miembro Numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Abogado Postulante.



Con afecto y admiración para el maestro Simón Salamanca Rodríguez

Cuando evocamos la figura de Nicolas Maquiavelo¹ su sola mención nos conduce a la turbulencia, el arrojo, incluso la traición y la deslealtad como adjetivos de su persona y su doctrina política. Nada más lejano a una correcta representación del canciller florentino. Es justo alejar a Maquiavelo del mal llamado “maquiavelismo” y comprender su legado histórico, clave para entender el papel del Estado en la vida moderna.

Maquiavelo pertenece a la Europa renacentista en la que la escolástica medieval tiende a ser reemplazada por una profunda transformación en el modo de pensar de los pueblos europeos a partir de un conjunto de corrientes muy diversas de pensamiento, las que, aun sin ser coincidentes, gestan una nueva visión del papel que tendrá el ser humano en el mundo y frente a sí. Particularmente Italia en los siglos XV y XVI se adentra profundamente en el movimiento renacentista. Italia es en gran medida la imagen del Renacimiento que se desarrolla en diversos campos del tejido social no solamente como una expresión intelectual, sino también política y social; de ahí que, como fenómeno histórico, el Renacimiento dejará ver cambios fundamentales en la vida económica, religiosa, incluso artística y literaria.

La separación del pensamiento cristiano y el retorno a la filosofía clásica griega genera en la sociedad un abandono paulatino pero constante de la visión teocéntrica en la que había transitado los últimos diez siglos y que, con la llegada del pensamiento racionalista, abandonará definitivamente. Se gesta un nuevo enfoque de carácter humanista, que avanza en la secularización de los valores que rigen a la sociedad y que irá formando, para el Derecho, la nueva manera de ver el mundo: el iusnaturalismo racional.

A Maquiavelo le corresponderá una época de profundos cambios sociales y de grandes transformaciones, lo que claramente influye en su pensamiento y en su manera de concebir lo que será el eje de su propuesta política: el Estado Nacional. Hombre de su tiempo, buscará conocer, profundizar en todo lo que le rodea con la condición de que ese conocimiento deberá someterse a los fundamentos de su propia razón. El florentino será un fiel seguidor de este principio racionalista; probablemente por ello su doctrina, absolutamente revolucionaria e innovadora sólo puede explicarse en la confrontación natural de ideas que el Renacimiento había hecho florecer.

¹ Político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano. *Niccolò Macchiavelli* (conocido en español simplemente como Maquiavelo) nació en Florencia el 3 de mayo de 1469, el mismo año en que *Lorenzo de Medici* se convertía en señor de facto de la ciudad. Así, durante toda su infancia y juventud tuvo oportunidad de ver en primera persona el ejercicio del poder y sus consecuencias: tenía nueve años cuando *Giuliano*, el hermano de Lorenzo, fue asesinado por la familia rival de los *Pazzi*, y durante los trece años siguientes vería cómo el señor de Florencia acumulaba el poder en sus manos y las consecuencias -buenas y malas- que se derivaban de ello. Secretario del gobierno *Dei Dieci* (Consejo de los Diez) encargado de la segunda cancillería de Asuntos Exteriores y Guerra de la República. Acometió numerosas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia. Autor de *El Príncipe*, un tratado de cómo obtener y conservar el poder político, publicado cinco años después de su muerte y con el que alcanzaría fama universal. Mas información sobre la biografía de Maquiavelo puede consultarse en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/maquiavelo-y-politica-sin-escrupulos_15281

Según Marc Bloch, citado por Castillo Peraza, "(...) la burguesía citadina, aliada a la realeza, que se encamina hacia el absolutismo, pone fin al feudalismo caballeresco".² Ello aporta dos hechos nuevos: el inicio de la nueva economía capitalista individual, frente al mercado cerrado de las corporaciones; y así, la impresión de inmensidad acaba por sustituir a la imagen del mundo artificial e inmediato, propio de la sociedad feudal.

El control del comercio exigía un gobierno mucho más poderoso que la vieja municipalidad feudal, en el que las decisiones políticas resultaban fundamentales ante la amplitud del nuevo mercado. "En el siglo XVI todos los gobiernos monárquicos habían adoptado una política consciente de la explotación de los recursos naturales, del fomento del comercio tanto interior como exterior y de desarrollo del poder nacional".³

Maquiavelo, testigo acucioso de estos acontecimientos, percibió con toda claridad que los intereses de la nobleza resultaban contrarios a los de la monarquía e, inclusive, también a los de la clase media y que, por consiguiente, era necesaria su destrucción. "Maquiavelo señala la oposición entre los intereses del pueblo y los de las clases pudientes", nos dice Pokrovsky, quien agrega que "traduciendo las reivindicaciones de la burguesía, Maquiavelo se pronuncia en favor de un Estado nacional netamente mundano, libre de la influencia de la iglesia católica feudal".⁴

Pero ¿cómo es que el florentino llega a esa conclusión? La situación histórica de Italia probablemente lo explica. A despecho del crecimiento cultural italiano, la situación política es caótica y la necesidad de unidad nacional, impostergable. Italia se encuentra conformada por un mosaico de diferentes estados y culturas como Nápoles, Milán y los Estados Pontificios, entre otros. Junto a estas regiones coexisten un sin número de Estados pequeños que no desean ser parte de los grandes estados italianos.

La falta de unidad nacional deja a su país desguarnecido ante las amenazas externas. Florencia había sido devastada por diversas luchas internas hasta que en 1434 cae en poder de la familia *Medici*, quie-

nes darán estabilidad económica a Florencia por los siguientes 300 años, en los que la figura de Lorenzo el Magnífico hará que Florencia sea el centro del Renacimiento italiano.

Contra lo que podría suponerse dado el impacto de su pensamiento y de su figura a través de la historia, el canciller florentino no fue un personaje importante en la política de su época. No obstante, sí podemos decir que gracias a su habilidad y astucia fue adquiriendo relevancia al conocer las entrañas de la política en Florencia, lo que le permitió comprender la política italiana y las relaciones de poder que se daban en la Europa renacentista. Más que historiador, Maquiavelo es un historiador político y más que político es un hombre pragmático.⁵

Si bien *El príncipe* es su obra más conocida, su conocimiento de la historia es fundamental para comprenderlo en toda su dimensión política. En *La Historia de Florencia*⁶, texto que José Luis Romero nos describe como un compendio en que la narración histórica y política no son dos polos de una misma preocupación sino dos motivos de una profunda reflexión sobre la existencia histórica que le toca vivir⁷, nos deja ver su profunda vocación histórica para construir los fundamentos de su tendencia ideológica. Sin embargo, las mayores sugerencias sobre su pensamiento histórico probablemente no se encuentren en *La Historia de Florencia*, sino en *El príncipe* y quizá aún más en los *Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio*, que nos permiten advertir la profundidad y coherencia que tenía Maquiavelo sobre la historia, la que no se expone deliberadamente en sus textos, sino que subyace como trasfondo en toda su obra.

Mención aparte merece *El Arte de la Guerra*, escrito entre 1519 y 1520, el texto está ambientado en 1516 y compuesto por un diálogo dividido en siete libros. En esta obra, Maquiavelo critica a las instituciones militares de su época y propone una versión novedosa para el empleo táctico y estratégico de una fuerza militar que garantice la unidad del Estado. El trasfondo tiene lugar en el jardín de la casa de Cosimo Rucellani, donde por medio de un diálogo entre Fabrizio Colonna y otros invitados, el autor desarrolla la teoría

2 BLOCH, Marc en CASTILLO PERAZA, Carlos, "Maquiavelo, ética y política", *Revista Logos, México*, Mayo-Agosto de 1979, p. 36.

3 SABINE, George, *Historia de la teoría política*, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, p. 322.

4 Cfr. MAQUIAVELO, Nicolás, *Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, Alianza, México, 2000, en CASTILLO PERAZA, Carlos, op. cit., p. 49.

5 Cfr. CILVETI, Elba Liliana, "Maquiavelo. Su forma de concebir la historia", *Revista de Historia Universal*, Argentina, 1989, p. 118.

6 *Istorie Fiorentine* es un libro clave en el discurso de Maquiavelo que acredita la enorme actualidad de su pensamiento. Obra concebida desde la categoría de anti-modelo (el ejemplo de lo que los hombres no deben hacer), constituye el primer tratado moderno sobre la decadencia en que la "fortuna" convive con la "virtud". En el estudio particularizado de la "corrupción" como causa de decadencia, Maquiavelo apunta un principio de superación de la distinción público/privado, que hoy se antoja esencial para la supervivencia de la autonomía política humana: el interés colectivo que enmarca la república.

7 Cfr. ROMERO, José Luis, *Maquiavelo historiador*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1986, p. 62.

de su novedosa propuesta militar. Fabrizio actúa como voz de la postura de Maquiavelo, siendo casi toda la obra diálogo suyo, mientras que los invitados se encargan de preguntar por diversos temas militares o por sus puntos de vista, respecto a alguna cuestión relacionada con el arte de la guerra.

Vale la pena entonces, reflexionar sobre el valor que tiene para Maquiavelo la historia que ha conocido. Como preámbulo debemos advertir que no se trata de un historiador en el sentido estricto de la acepción moderna, de tal manera que se acerca a la historia para proponer soluciones a los problemas sociales de su época. Es decir, subordina la historia a la política, convierte a la historia en una herramienta pragmática en tanto le es útil a su pensamiento.

Es probable que ello sea el resultado de la admiración que profesa sobre los primeros siglos de Roma, que considera es la que ofrece al mundo moderno las mayores enseñanzas. Roma, a la que conoce a través de los escritos de Tito Livio y el pensamiento de Polibio, a quien tanto admiró, lo llevará también al conocimiento de la historia griega y a la historia moderna de Occidente. Por eso, logra comprender el pensamiento europeo y, como resultado de esa particular visión, plantea comparaciones entre Grecia, Roma y los nuevos estados para buscar, a partir de su análisis, el fundamento de las ciudades libres, las que propondrá construir desde una estructura de leyes e instituciones.

Maquiavelo dejará como su mayor legado la figura del Estado unitario de carácter nacional. Esta forma de concebir la organización política de su país será una expresión de derecho positivo. Se trata pues de un hombre de Estado que está atento a su evolución y destino. No es un científico de la política porque aprende de la experiencia y compara a través de ejemplos históricos lo que es mejor para su tiempo. Pero, en reconocimiento a su extraordinaria habilidad política y a su refinamiento como diplomático, advierte que el secreto de un buen gobierno se encuentra en la capacidad de equilibrar y ordenar a los factores de poder, porque el propósito de la política es uno solo: Fundar a un Estado que sea capaz de conservar y engrandecer en el tiempo al propio Estado. Se adelanta a la monarquía y propone por primera vez la existencia de la Nación. De ahí su gran legado: el Estado Nación.

En el contexto renacentista en que el hombre es el centro de la decisión y el eje del orden político, Maquiavelo juzga a la libertad humana y a la historia a través de las fuerzas que la limitan, las que, considera, niegan la libertad. Y curiosamente nos propone que es la historia misma la que encierra al hombre en un ciclo infinito de repetición y recurrencia. De la mano de la historia adjudica al azar, a la casualidad, todo lo imprevisto en cuanto escapa al cálculo de la previsión humana y acepta que el hombre no puede cambiar los designios de la fortuna.

Como historiador, Maquiavelo utilizó a la historia como un instrumento que explica y da contexto a lo político, pero también como un recurso pedagógico para trazar el sendero que da sentido a su pensamiento social. Quizá por ello no sea visto como un historiador sino como un político, debido a que la realidad lo abrumaba y los problemas de Florencia eran su motor de investigación y de reflexión permanente. La historia en Maquiavelo termina siendo la narración del presente contrastado con el pasado. Renaudet nos dice que:

(...) la grandeza de Maquiavelo no está ni en lo que hizo ni en lo que quiso hacer ya que sus proyectos fueron igualmente ilusorios. No está siquiera en su obra compuesta en un solo libro inacabado y un vigoroso tratado de política. La grandeza de Maquiavelo reside en su análisis de los hechos que forman a la política, en su análisis de las instituciones y las leyes, y en el esfuerzo que realizó para construir la ciencia de la política.⁸

La trascendencia de Maquiavelo reside en su particular sagacidad crítica. Sabía muchas cosas, otras creyó saberlas y así mezcló la historia para dar seguridad dogmática a su pensamiento. Pero ¿acaso en el universo todo está ordenado? Al entender el caos en que ha vivido la humanidad y darse cuenta de que el mundo no estará nunca determinado u ordenado, guió la esencia de su propuesta fundamental: el ser humano puede hacer un mundo diferente por sí mismo. Esa es la belleza de la propuesta política e histórica que Niccolò Macchiavelli nos compartirá por siempre.

8 RENAUDET, Agustín, *Maquiavelo*, Trad. Francisco Díez del Corral y Daniele Lacascade, Tecnos, Madrid, 1965, pp. 134-135.



EL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL PROCESO LABORAL BUROCRÁTICO

Dr. Magdaleno Villanueva Flores

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y Doctor en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido docente en la UNAM-SUA, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y otras instituciones. Actualmente es Director de la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Asociado del Despacho Jurídico LTM & Abogados. Socio Director del Despacho Jurídico Villanueva y Asociados. Asesor jurídico de diversas empresas y trabajadores en materia laboral. Abogado litigante en materia laboral, administrativa, civil y familiar.

Según el artículo 146 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), las resoluciones (entre ellas los laudos) dictadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) serán inapelables y deberán de ser cumplidas por las autoridades correspondientes; para ello, según el artículo 147 de la LFTSE, las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al TFCyA cuando éste se los requiera.

En consecuencia, según el artículo 150 de la LFTSE, el TFCyA tiene la obligación de proveer lo necesario para la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Para ello, según el artículo 151 de la LFTSE, despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada para que cumpla con el laudo; apercibiéndolo que, de no dar cumplimiento, con base en el artículo 148 de la LFTSE, le impondrá una multa de hasta mil pesos. Multa que se hará efectiva por la Tesorería General de la Federación, según lo mandata el artículo 149 de la citada ley. Sin embargo, en la práctica cotidiana esta multa pocas veces se hace efectiva.

Por otro lado, la realidad cotidiana de los justiciables ante el TFCyA ha desvelado que este procedimiento legal resulta poco o nada eficaz para lograr la ejecución de los laudos; pues sólo genera evasivas de los

Titulares de las dependencias demandadas, quienes argumentan estar realizando los trámites necesarios para dar cumplimiento al laudo de forma indiscriminada, sin que den cumplimiento a éste de forma oportuna. Situación que genera que el justiciable que obtuvo, cuando éste es el trabajador, vea cómo se retarda de forma injustificada la impartición de justicia por parte de dicho TFCyA; además de ver cómo se violenta en su perjuicio el derecho humano de acceso a la impartición de una justicia pronta, expedita y completa que le reconoce el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional.

Dado que la LFTSE no dota de otros medios de apremio al TFCyA, salvo la multa antes señalada, durante muchos años éste se negó a usar otro tipo de medidas de presión para lograr la ejecución de sus laudos, con el argumento de que dicha ley no le daba mayores herramientas para ese efecto. Debido a lo anterior y su perseverancia, los defensores de los trabajadores, mediante la promoción de juicios de amparo y a través de criterios de jurisprudencia, han logrado que se dote al TFCyA de mayores herramientas para que pueda ejecutar sus laudos.

En ese sentido, a través de la Tesis de jurisprudencia 133/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión privada del diecisiete de septiembre de dos mil ocho, registro digital 168880, se determinó que:

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía (...) Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa.¹

Como puede verse, en el texto de dicha jurisprudencia no se precisó cuáles son los instrumentos legales que integran la “amplia gama” con la que cuenta el TFCyA para lograr el cumplimiento de sus laudos.

Remando en el mismo sentido, aunque con mucho menor jerarquía, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el viernes 15 de octubre de 2021, publicó la tesis de

jurisprudencia por reiteración de criterio, con registro digital 2023684. En ella, sostuvo el siguiente:

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje adviertan una omisión de la parte demandada para cumplir un laudo firme, tienen la obligación de imponer e impulsar toda una gama de facultades e instrumentos legales para lograr su ejecución integral, con el objeto de respetar el derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.²

Para mayor precisión, determinó que las Salas del TFCyA tienen la obligación de imponer e impulsar toda una gama de facultades e instrumentos legales para lograr su ejecución integral de sus laudos, entre las que se encuentran siguientes:

a) **Imposición de multas** –previo apercibimiento–, cuya ejecución debe impulsar ante el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, debiendo verificar que aquéllas sean efectivamente cobradas, con fundamento en los artículos 148 y 149 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; b) **Solicitar al titular del órgano interno de control** donde se encuentra adscrita la autoridad demandada, que se inicie una investigación en su contra por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas o disciplinarias e, inclusive, solicitar que se decreten medidas cautelares o de apremio en dicho procedimiento, en términos del artículo 136, fracciones IX y X, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; c) **Solicitar al titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México** que realice una investigación por desacato a un mandato jurisdic-

¹ Énfasis añadido.

² Énfasis añadido.

cional, en términos de los artículos 13, fracciones I, IV, V y VII, de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; **d) Impulsar –en coordinación con la autoridad demandada– una solicitud dirigida al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México**, con el objeto de tramitar la autorización de los pagos derivados del cumplimiento del laudo, de conformidad con el resolutivo octavo del Acuerdo por el que se delega en la persona titular de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de otorgar el visto bueno, previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública de la Ciudad de México, o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente favorables al capital humano al servicio de la administración pública de la Ciudad de México, y por el que se constituye la mesa de asuntos de cumplimiento de capital humano de la Comisión de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México; **e) Informar sobre el incumplimiento del laudo al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien tiene facultades para solicitar al Congreso de la Ciudad de México** la asignación de una partida presupuestal especial para que la parte demandada, en sus respectivos casos, cumpla con el laudo e incidente de liquidación, con fundamento en el artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); **f) Asimismo, tratándose de una Alcaldía demandada, puede solicitar ante la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México**, se realice la investigación correspondiente por el incumplimiento a un mandato jurisdiccional, de acuerdo con los artículos 289 a 291 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y, **g) Formular una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación** por la posible comisión del delito de desobediencia de un mandato legítimo, en su caso, ante el incumplimiento deliberado del laudo firme,

con fundamento en el artículo 178, párrafo primero, del Código Penal Federal.³

Este mismo Tribunal Colegiado, mediante tesis de jurisprudencia por reiteración de criterios, publicada el viernes 07 de enero de 2022 en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023991, emitió el siguiente:

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que **el juicio de amparo indirecto procede contra la omisión de las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de hacer cumplir integralmente un laudo firme, aun cuando en autos obre constancia de haberse dictado diversas medidas para su ejecución, sin lograrlo**, pues la obligación impuesta a esos órganos jurisdiccionales se agota hasta el cumplimiento total del laudo.⁴

Además, sustentó dicho criterio en la siguiente:

Justificación: Lo anterior es así, porque cuando la autoridad responsable no acredita que la omisión aludida está justificada, transgrede el derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...

A pesar de los avances realizados, las Salas del TFCyA se niegan a utilizar otros medios de apremio existentes en la legislación mexicana, diversos a los ya precisados, para lograr la ejecución de sus resoluciones. Además, diversos Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México han ratificado el desechamiento de demandas de amparo indirecto, promovidas por la defensa de los trabajadores en contra de la contumacia de dichas Salas para lograr la ejecución de sus laudos.

No obstante, se estima que las Salas del TFCyA deben de aplicar los criterios de jurisprudencia por precedentes emitidos por la Primera Sala de la SCJN,

³ Énfasis añadido.

⁴ Énfasis añadido.

con los rubros DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS; y PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS, Tesis 1a./J. 28/2023 (11a.) y 1a./J. 29/2023 (11a.), con registros digitales 2026051 y 2026079, respectivamente; la cuales fueron publicadas el 3 de marzo de 2023 en el Semanario Judicial de la Federación, y que determinan lo siguiente:

Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de dicha institución pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue confirmada en apelación. En desacuerdo, se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia. En contra de esta última resolución se interpuso revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio, durante y posterior al mismo; siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la ejecución de sentencias y resoluciones.

Justificación: El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran diversidad de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes de este Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, atendiendo integralmente a todo este parámetro, se sostiene que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una preten-

sión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. **Derecho que comprende tres etapas:** i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así las cosas, se considera que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Por lo tanto, para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable; esto inclusive cuando el Estado, como parte, sea quien incumpla la ejecución de una sentencia o resolución. Lo anterior es así, pues detrás del reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en su modalidad del derecho a la ejecución de las sentencias, no sólo están el derecho subjetivo del vencedor en juicio y el derecho de acceso a la justicia, sino que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales.

Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de dicha institución

pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue confirmada en apelación. En desacuerdo, **se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia.** En contra de esta última resolución se interpuso revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **determina que la igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica**, que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como director del proceso.

Justificación: El derecho al debido proceso encuentra reconocimiento en normas de rango constitucional (artículos 14 de la Constitución General y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) **y consiste en un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.** En síntesis, se ha afirmado que **este derecho requiere el cumplimiento de "ciertas formalidades esenciales del procedimiento", que a su vez se materializa en:** i) un acceso a la justicia no sólo formal sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables; ii) el desarrollo de un juicio justo; y, iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir, **se asegure su solución justa.** Atendiendo a este contenido, la jurisprudencia ha reconocido una modalidad específica de este derecho que se refiere a la igualdad procesal, el cual ha sido interpretado exhaustivamente en el amparo directo en revisión 308/2017. **En ese sentido, se estima que el principio de igualdad procesal como modalidad del debido proceso y de la igualdad**

jurídica procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales y, al mismo tiempo, se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Sin que dicho principio signifique una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de los derechos y las cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes. **De modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra y de suerte que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebranten el principio.**⁵

Los precedentes antes citados derivaron de la sentencia emitida por la Primera Sala de la SCJN al resolver el recurso de revisión 144/2021, quien determinó que, cuando la autoridad resolutora concluye que el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) prohíbe de forma absoluta la emisión de cualquier auto de ejecución en contra de una institución pública, dicha interpretación es inconstitucional y, por tanto, violatoria de derechos humanos. Es decir, concluye que la constitucionalidad de dicho precepto no puede sostenerse con base en la exposición de motivos 1942 ni supera el test de proporcionalidad al contravenir los derechos fundamentales de igualdad jurídica, igualdad procesal y acceso a la justicia en su garantía de ejecución material y efectiva de las sentencias.

Sobre todo, porque el derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran variedad de normas de rango constitucional. Entre ellos, el artículo 17 Constitucional reconoce el derecho humano que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales expeditos, dentro de plazos y términos fijados por las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Además, en su párrafo séptimo, de manera expresa reconoce como parte de este derecho la plena ejecución de las sentencias (o laudos).

5 Énfasis añadido.

Por otro lado, la Primera Sala de la SCJN realizó una interpretación alternativa que le permitió concluir que el artículo 4° del CFPC, con base en los principios de presunción de constitucionalidad y legalidad jurídica, sí es constitucional y que, por tanto, no prohíbe de forma total y tajante la emisión de autos de ejecución en contra de las dependencias públicas.

En efecto, cuando el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles implementa las excepciones al principio de igualdad procesal relativas al mandamiento de ejecución y providencia de embargo, esta disposición puede interpretarse de dos maneras. La primera interpretación radica en que estas excepciones se valoren de manera absoluta. La otra modalidad interpretativa consiste en que la regla de excepción no debe apreciarse de manera absoluta; es decir, cabe delimitar el campo de aplicación de las excepciones relativas a dictar mandamientos de ejecución y providencia de embargo, de modo que la imposibilidad únicamente recaiga sobre determinados bienes del Estado. Por consecuencia, esta interpretación implica que, aunque la regla general sea la aplicabilidad de las referidas excepciones procesales, sí es posible que el juzgador dicte mandamiento de ejecución o providencia de embargo cuando, a partir de la información que conste en el expediente (aportada por las partes o incorporada mediante medidas para mejor proveer), sea factible identificar que los bienes que podrían ser objeto de tales determinaciones no están sujetos a cualquier régimen de dominio público por parte del orden jurídico (Federación, Estados o Municipios) al que pertenecen las referidas entidades de la administración pública o que, en su caso, no exista una prohibición expresa para ser embargados conforme a las leyes aplicables.

Lo anterior es normativamente viable ya que, por un lado, no se excluye de manera categórica y absoluta por el propio artículo 4° del código procesal civil. Aunque se utiliza la expresión "nunca", ese término también puede ser objeto de matizaciones y esa matización deriva de la propia forma en que está construida la norma. Además, hay que recordar que estos supuestos de excepción son justamente articularizaciones de la regla general de igualdad procesal, por lo que cabe su interpretación restrictiva.

Por ende, el artículo citado no puede valorarse de manera aislada, sino de manera sistemática con el resto de las disposiciones del código civil. Por ello, es viable interpretar que las diferentes normas que rigen el procedimiento en cualquier materia (la laboral no

es la excepción) y, en particular, la etapa de ejecución, parten de una presunción impuesta por el legislador de que todas las obligaciones deben cumplirse cuando derivan de resoluciones que gozan de ejecutabilidad, incluso de manera forzosa. Porque, si no se partiera de esa presunción, quedaría totalmente desprotegido el derecho de acceso a la justicia.

Tal artículo también debe interpretarse de manera sistemática con otras legislaciones, como la laboral. Por consiguiente, si partimos de la premisa de que las entidades de la administración pública actúan en el procedimiento ordinario en un plano de igualdad procesal, no puede pasarse por alto que ciertos bienes de las entidades de la administración pública federal, estatal o municipal no están sujetos al régimen de dominio público y, por ende, su uso u aprovechamiento no busca satisfacer enteramente una finalidad pública. Por tanto, al existir una disminución en la protección que otorga el ordenamiento jurídico a dichos bienes, éstos sí pueden embargarse.

Con base en lo anterior, es posible concluir que el TFCyA debe de autorizar el embargo de cuentas bancarias con respecto a aquellas dependencias públicas que tengan ingresos propios por concepto de autogenerados; es decir, que cuenten con bienes que estén fuera del régimen de dominio público. Hacer uso del embargo como herramienta jurídica en el procedimiento de ejecución de los laudos, mejoraría de forma considerable la eficiencia y la eficacia de éste como instancia jurisdiccional encargada de impartir justicia en el Derecho Laboral Burocrático.





¿PUEDEN SER LOS ROBOTS UNA PERSONA JURÍDICA?

Dr. Carlos Ortega-Laurel

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México; Maestro en Administración de Negocios por la Universidad Nebrija, España; Doctor en Administración de Negocios por la Universidad de Negocios ISEC, México; Licenciado, Maestro y Doctor en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, México; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Profesor-investigador del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, México.

¿QUÉ ES UN ROBOT?

Para poder abordar la posibilidad de consentir la existencia de la personalidad de los robots u otro constructo o estatuto jurídico, hay que comprender qué es un robot. En este sentido, rescatando lo que define la Real Academia Española (RAE), se ubica que define por robot a la “Máquina programable capaz de realizar trabajos antes reservados solo a las personas. Su plural es robots (→ plural, 1h): «En las industrias habrá más robots que hombres»”. Bien vale hacer mención que la construcción tecnológica de los robots ha evolucionado en el tiempo, por lo que igualmente es pertinente considerar que la definición de “robot” ha evolucionado con el tiempo.

Interpretando la definición de la RAE, claramente se entiende que los robots son máquinas de ingeniería, esto es, son producto del ingenio de algún ingeniero mecánico, electrónico, mecatrónico, robótico o de cualquier otra rama de la ingeniería afín, ingeniero que, con el conocimiento de las técnicas y las ciencias de la ingeniería pertinentes, propone un diseño de robot capaz de realizar determinadas funciones o tareas para las que se le diseña, esto a través del hardware pertinente; además esto de acuerdo con las instrucciones programadas por el ingeniero, que en principio es un ser humano quien diseña el hardware y software que le da vida y habilita la lógica del robot, cualquiera que esta sea.

Ahora bien, si criticamos la definición de la RAE, es posible mencionar que tal definición es parcialmente correcta hoy en día e, incluso, a la postre de los avances plausibles por la ingeniería de hoy día, se puede

decir que sí está bien, pero si bien incompleta para las técnicas y ciencia en el contexto de la ingeniería robótica de última generación. Hoy día un robot ya puede contar con 5 atributos de última generación, que son: conocimiento interno, conocimiento externo, capacidad de comunicación y cierto grado de creatividad e intencionalidad, aunque todo sesgado a la algoritmia especificada por un ingeniero humano.

La gran diferencia entre la manifiestamente antigua definición-concepto de robot de la RAE y lo más actual de la industria robótica es que, en los robots modernos, ya hay la capacidad de dotarlos de cierta inteligencia artificial, y de ello que los más sofisticados robots pueden algorítmicamente tomar decisiones, de conformidad con criterios iniciales de conformación-estructuración, que computacionalmente hablando se procesan vía fórmulas y algoritmos de decisión, en función de las circunstancias a las que se enfrente particularmente un determinado robot.

Aquí bien vale apuntar que, si bien es cierto que, por el momento, las capacidades de un robot con inteligencia artificial (IA), entendiendo por IA una capacidad de toma de decisiones de una máquina mediante el procesamiento de datos con la ayuda de algoritmos, permiten dotarle de alguna capacidad de decisión, no menos cierto es que dichas capacidades a la fecha en ningún caso alcanzan las de un ser humano promedio, por lo que bien vale esta acotación porque se tiende a vaticinar a la ligera la existencia de robots inteligentes, que inclusive se presume pueden poner en peligro a la especie humana.

Dicho lo anterior, tampoco se debe perder de vista que tal vez sea sólo una cuestión de tiempo para que la inteligencia artificial de un robot llegue a ser la de un ser humano promedio, momento en que habrá que realizar un análisis de la definición de robot en tal contexto.

Toda vez que el comportamiento de los robots de hoy día responde a consignas u objetivos avanzados, intermedios o básicos respecto a la inteligencia, manifiestamente en todos los casos programados, entonces debe ser claro que la semilla de la lógica del robot, cualquiera que esta sea, en todos los casos un humano la idea, diseña, crea e implementa.

Ya en operación, esto es, en uso, en su ciclo de vida, el robot ejecuta sus actos de acuerdo con la semilla y lo que el autocontrol le permita y retroalimente, perpetuamente basado en los algoritmos semilla que se le definió, sustentado en los arquetipos de la arquitectura tecnológica en el que se le concibió y creó, sin que en ningún caso los robots se autoevolucionen, desarrollen y desplieguen, o se basen en cálculos algorítmicos creados por los propios robots. Contexto en que potencialmente se podría advertir un especie de pérdida del control de los robots, de materializarse dicha circunstancia, esto es, que los robots se gobiernen con total independencia, que se autocrean con total independencia de los ingenieros diseñadores programadores o inclusive de propietarios-usuarios de la tecnología que los adquirieron, y que existan por su propia naturaleza robótica y se perpetúen gracias al proceso de autoaprendizaje que le dotare su intelecto, haciendo propias, suyas e inclusive exclusivas las capacidades, actividades, prácticas, hábitos, rutinas, usos, costumbres, vocabulario e ideas de los robots, en su robótica comunidad, o como miembros de la comunidad mezclada humanos – robots en la que nacieran, crecieran, se reprodujeran y murieran.

¿QUÉ ES LO QUE SE NECESITA REGULAR A LOS ROBOTS?

Está claro que hoy día existen robots o sistemas robóticos que tienen algún nivel particular de inteligencia o capacidad. Con dicha capacidad realizan ciertas tareas o actividades que, en el grueso de los casos de uso de los robots, son simplemente una secuencia de declaraciones "sí" o "no" que mira u observa el robot en su algoritmia. Por ejemplo, un robot con aplicación al mercado de valores se le podría asignar la labor de

tomar decisiones de compra y venta de acciones, esto en función de la caída o subida de los precios o inclusive considerando criterios más complejos, producto de la consideración de diversas variables, y todo en tiempo real, incluso podría ser un algoritmo que tome decisiones al azar, o con base en lo que le arroje una emulación de escenarios entre los que tendrá que decidir, o tal vez que decida con base en datos que se pueda allegar.

En este escenario se podría equivocar o no el robot y, derivado de tal podría haber alguna consecuencia de naturaleza diversa. Sin embargo, es claro que el comportamiento del robot, sus actos, sus decisiones, responden a meras consignas u objetivos programados, y en los robots dotados de inteligencia artificial, gracias al proceso de autoaprendizaje por sí, de conformidad con el algoritmo.

El robot, de darse el caso arriba descrito, pareciera que actúa con independencia de sus diseñadores-programadores o de su propietario, pero no se debe perder de vista que el robot no se llevó solo ahí, esto es, no actúa por su libre albedrío, sino por el libre albedrío, voluntad, gusto, arbitrio, potestad, deseo de quienes ejercen posesión y control sobre el robot, que son sus diseñadores-programadores y/o de su propietario -en concepto de propiedad de un bien, por ejercer la acción de propiedad y/o dominio del robot como un activo-.

Entonces, ¿qué es lo que se necesita regular? Dado que está claro que hay robots que encuadran con la definición de la RAE y, que en todo caso se les pudiera clasificar a tales como robots esclavos / cautivos / encadenados / aprisionados, y los robots dotados de cierta inteligencia artificial, que les permite como robots aprender de sí mismos y tomar decisiones de forma superficialmente autónoma, con total restricción a su algoritmia, advirtiéndose que en realidad se decide de forma no muy autónoma, sino más bien limitada a lo que puede señalar por formalmente estar definido en su algoritmia, por lo que incluso se comprende que no hay robots independientes, sino todos totalmente dependientes, y eso no aporta hasta hoy día la característica de independencia, inexcusablemente necesaria, para que a los robots se les pudiera equiparar, esto es, para consentir la existencia de la personalidad de los robots u otro constructo o estatuto jurídico, de contar con características suigéneris como la del "albedrío" análogo al humano u otra.

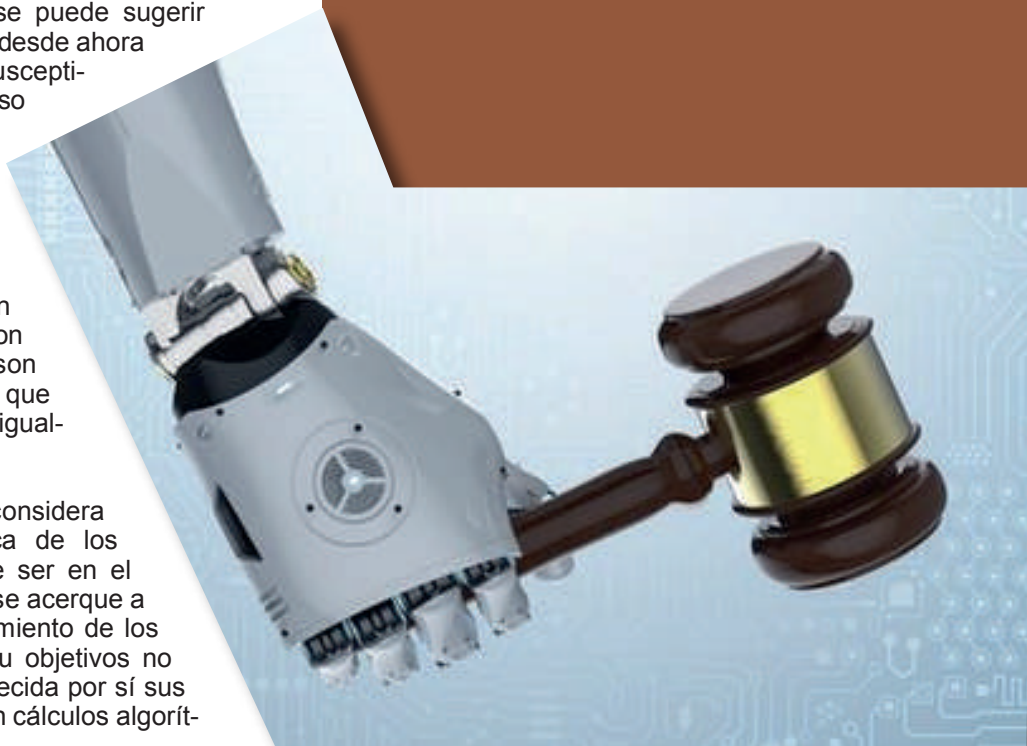
Por lo anterior, tanto los robots cautivos, como los robots inteligentes, sí necesitan ser regulados, pero no debería consentirse su uso en la existencia de conceptos como el de la personalidad, ahora pretendiendo atribuir tal a los robots, para dar paso a la personalidad de los robots u otro constructo o estatuto jurídico, sino que debería de crearse un estatuto totalmente nuevo "ente robot" u otro, totalmente distinto a los existentes, con toda su caracterización de forma y fondo, como los relativos a las personas física, moral o jurídica, tesitura en la que incluso hay que preguntarse si se le podrán asignar derechos y obligaciones al "ente robot" o qué es lo que en todo caso se les debe asignar.

Así lo que se propone entonces es la creación de una especie de constructo y estatuto jurídico a medida, posiblemente con afinidades al actual concepto de personalidad jurídica, sin que lo sea, y que tal estatuto sea específico para los robots en sus diversas formas.

Tal concepto, "ente robot" u otro, sin que esté aún creado, se visualiza desde ahora que no deberá ser para todos los robots. Esto ya que, como se identificó y conceptualizó, hay necesidad de tipificar y diferenciar entre: aquellos robots que sean parte de la "especie" -nacidos, crecidos, reproducidos y que morirán en un contexto de lo que se puede sugerir como la "especie robot", que desde ahora se visualiza son los únicos susceptibles de que en todo caso deban ser considerados responsables de reparar los daños que puedan causar, en otras palabras, estar sujetos a sus pertinentes obligaciones y derechos; además, los que gozan de una autonomía amplia o con mayores capacidades y que son productos de ingeniería; y los que son cautivos / esclavos e igualmente productos.

Por lo vertido hasta aquí, se considera que la personalidad jurídica de los robots sólo tendrá razón de ser en el momento en que la realidad se acerque a la hoy ficción y el comportamiento de los robots responda consignas u objetivos no programados, que el robot decida por sí sus actos y que tales se basen en cálculos algorítmicos

creados por el propio robot o los propios robots como una "especie" en el planeta. Lo anterior con total independencia de los ingenieros humanos, sean éstos sus diseñadores, creadores, programadores o potentados, esto es, gracias al proceso de autoevolución de su "especie" y autoaprendizaje como "especie robot", momento en el que inclusive tal "especie" lo reclamaría a la sociedad robo-humana por sí misma. Hasta en tanto, se considera que no se hace imperativamente necesario regularles hoy la personalidad en el más amplio contexto de la palabra jurídicamente hablando, sino que es suficiente con considerarles un constructo o estatuto jurídico, como la sugerida figura "ente robot" u otro.



CONVOCATORIA PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL



Dr. Dante Jehová Cisneros García

Doctor en Derecho, Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Licenciado en Derecho, Especialidad en Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal. Especialista en materia de Comercio Exterior y Aduanas. Autor del libro *Importando a México y Exportando al Mundo*. Catedrático y conferencista reconocido por diversos organismos y revistas como Asesor en Comercio Exterior y Aduanas. Actualmente funge como Director General de Grupo Dacis. Es Director de la Escuela de Comercio Exterior y Aduanas (ECEX) y Director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ). Miembro de la Academia Internacional de Codificación Arancelaria de las Mercancías, A.C.; del Comité Técnico de Normalización Nacional de Bebidas Alcohólicas y del Colegio de Profesionistas con Posgrado en Derecho, A.C.

El pasado jueves 22 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tan esperada “Convocatoria para obtener Patente de Agente Aduanal” por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ya como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual convoca a las y los ciudadanos mexicanos por nacimiento, interesados en participar en el proceso de selección para aspirar a la obtención de una patente de agente aduanal.

Dentro de las bases de la convocatoria se establece que los interesados deberán presentar su solicitud a través de la liga https://intra.anam.gob.mx/convocatoria_aa, en la que manifiesten los siguientes datos:

- Nombre completo
- RFC y CURP
- Currículum Vitae con fotografía
- Aduana de Adscripción en donde desea operar
- Domicilio para oír y recibir notificaciones

- Correo electrónico y correo electrónico alternativo para recibir notificaciones
- Teléfono fijo o móvil y teléfono alternativo fijo o móvil

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo que para ello establece el artículo 159 de la Ley Aduanera, se deberá de subir en la referida liga, en archivo pdf, la siguiente documentación:

- Acta de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente con fecha de expedición no superior a un año.
- Carta bajo protesta de decir verdad debidamente firmada con fecha al día de su presentación, mediante la cual se manifieste no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, ni haber sido agente aduanal o apoderado aduanal, o en su caso de haberlo sido, manifestar que su patente no haya sido cancelada o extinguida.
- Carta bajo protesta de decir verdad debidamente firmada con fecha al día de su pre-

sentación mediante la cual se manifieste no ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo.

- Carta bajo protesta de decir verdad debidamente firmada con fecha al día de su presentación mediante la cual se manifieste no tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el titular de la aduana de adscripción de la patente.
- Título profesional de nivel licenciatura, debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
- Constancia con la que se acredite fehacientemente contar con experiencia en materia aduanera mayor a 5 años.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo expedido por el Servicio de Administración Tributaria al día de su presentación.

Para el efecto del registro e inscripción, la convocatoria establece que los interesados deberán ingresar al sistema dentro de un horario de 09:00 a 19:00 horas, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que sólo se recibirá un máximo de 100 solicitudes por día.

Una vez efectuado el registro, revisada y validada la documentación por parte de la autoridad aduanera, los solicitantes recibirán un comunicado vía electrónica, indicando que su solicitud fue procedente y se les convocará a sustentar el examen de conocimientos.

La aplicación del examen de conocimientos se practicará por única ocasión y el aspirante deberá obtener una calificación mínima de 85 sobre 100 puntos. El examen se compondrá de cinco módulos, con un valor de 20 puntos dando un total de 100 puntos, que valorarán lo siguiente:

- A)** Conocimientos generales de Derecho Aduanero y Comercio exterior.

- B)** Reglas generales y complementarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

- C)** Clasificación arancelaria.

- D)** Análisis de pedimento y sus anexos.

- E)** Caso práctico de operaciones de Comercio Exterior.

Para el caso de aprobar el examen de conocimientos, continuará con la segunda faceta correspondiente a la aplicación del examen psicotécnico, donde se llevará a cabo la evaluación médico-toxicológico, polígrafo, entorno socioeconómico y psicológico, por parte de la Dirección General de Evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En caso de no aprobar el examen psicotécnico o de no haberse sustentado, le será notificado a través de oficio emitido por la Dirección General Jurídica de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tal situación y se tendrá por concluida la solicitud. Los resultados obtenidos en las evaluaciones son definitivos, inapelables y confidenciales.

Para aquellos que cumplan con las Bases, Fases y otras previsiones indicadas en la Convocatoria, así como los requisitos previstos en el artículo 159 de la Ley Aduanera, les será otorgada la Patente de Agente Aduanal, previo pago de los derechos por concepto de expedición.

Dentro del rubro "Otras Previsiones" la referida convocatoria establece para el caso de aquellos aspirantes que, a través de un juicio de amparo, se les haya emitido a su favor una convocatoria que haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, el que deberán sujetarse a las Bases, Fases, Etapas y Procedimiento de la misma, sin que puedan participar e inscribirse en la Convocatoria general. Así mismo, para el caso de aquellos aspirantes que aún promovido su juicio de amparo, no han obtenido sentencia favorable ejecutoriada, deberán sujetarse a los lineamientos, bases, fases, etapas y procedimiento establecidos en la presente convocatoria.

Cabe mencionar que a la fecha de redacción de este artículo, ya se encuentra cerrada la inscripción de solicitudes para participar en la obtención de una patente de agente aduanal, misma que se desarrolló los días 22, 23, 26, 27 y 28 de junio de 2023 y, por consiguiente, sólo aquellos que pudieron obtener un registro de los 500 ofertados tendrán la posibilidad de llevar a cabo los exámenes correspondientes, siendo oportuno señalarles que para la realización de los exámenes de conocimientos y psicotécnicos NO SE PODRÁN INTRODUCIR O UTILIZAR teléfonos celulares, computadoras, tablets, o cualquier otro aparato electrónico.

Por lo que deberán acreditar un amplio conocimiento y dominio en cuanto a la clasificación arancelaria de las mercancías, de regulaciones y restricciones al comercio exterior, de tratados internacionales, de legislación aduanera y comercio exterior, así como del correcto llenado del pedimento aduanal y sus anexos, basándose única y exclusivamente

con el material impreso que tenga a bien llevar consigo el sustentante en la fecha y hora programada para tal efecto.

No sólo se les desea suerte, ya que la patente de agente aduanal es un reconocimiento por parte del Estado a aquella persona que demuestra tener amplio conocimiento y experiencia en materia aduanera, así como de que cuenta con el grado de confiabilidad para ser un coadyuvante en la actividad aduanera del país.





BAPAROSA ABOGADOS



Asesoría y orientación legal
especializada en Defensa Jurídica.



Brindándole un servicio de alta calidad,
para su entera satisfacción.



Contamos con una amplia experiencia en
asuntos laborales, civiles, familiares,
penales y administrativos.



Nuestros especialistas están altamente
capacitados y comprometidos para
brindarle confianza y certeza jurídica, en
tiempo y forma para su total satisfacción.

Teléfono: 5571590689 y 5571590683

Calzada Azcapotzalco - La Villa #308 Interior 205, Colonia Barrio de Santo Tomas,
C.P. 55120, Alcaldía de Azcapotzalco. Ciudad de México.

LICENCIA PARA PERSONAS MENSTRUANTES EN MÉXICO

Mtra. Dafne Rosales Rodríguez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, Maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Se ha desempeñado en áreas jurídicas como abogada de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas N°5 en pensiones del ISSSTE, actualmente se desarrolla en el puesto auxiliar jurídico, realizando el seguimiento de las acciones de inconstitucionalidad contradicción de criterios y controversias constitucionales en materia electoral, así como coadyuvando en la edición del proceso de elaboración de Sentencias Relevantantes de Cortes Extranjeras en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mtro. Enrique Bautista Paz

Licenciado en Derecho por el Instituto Patria Bosques, Maestro en Derecho Constitucional, Maestro en Derecho Laboral y Doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Catedrático de Licenciatura y Maestría de las asignaturas de Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, Seguridad Social, Derecho Constitucional, y Amparo en Derecho Social en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ponente en diversos cursos sobre los derechos laborales de los trabajadores, procedimiento laboral, procedimiento especial en seguridad social y de la Nueva Reforma Laboral. Autor de varios artículos de revistas jurídicas. Litigante en materia laboral, con experiencia de más de trece años, desde el 2016 se desempeña como socio del despacho BAPA-ROSA ABOGADOS, especialistas en Derecho laboral y de seguridad social.



A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, siguen existiendo temas que conflictúan a la sociedad y son difíciles de tratar en el día a día, la menstruación es uno de ellos, pues sigue siendo un tabú y, por esa razón, el tratarlo en el ámbito público es poco probable, lo que sin duda lleva a que no exista ninguna legislación al respecto. Es por ello que las cuestiones relacionadas al periodo menstrual deben de ser eje central del debate público para que, de esa forma, se conciben leyes en México; para beneficiar a todas las personas menstruantes y, con ello, garantizar los derechos laborales de las mujeres, cerrando la brecha de desigualdad que durante años ha afectado a cientos de miles de mujeres. Tomando en cuenta que las féminas durante la mitad de los años de su vida tienen que pasar por el ciclo menstrual, el hecho de que pueda existir una licencia para otorgar dos o tres días con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras indica que vamos por buen camino.

“Las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo.”

Hillary Clinton

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la menstruación “es el proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina. Es un proceso natural y sano para las niñas y las mujeres en edad reproductiva. En las comunidades occidentales, a menudo se le llama el “periodo”. Normalmente dura de 2 a 5 días, pero esto varía según la persona.”¹

Un alto porcentaje de las mujeres sufre lo que se conoce como **dismenorrea primaria**,² pero ¿Qué es

1 UNFPA, “La menstruación y derechos humanos- Preguntas frecuentes”, mayo 2022, en <https://www.unfpa.org/es/menstruacion-preguntas-frecuentes#¿Qué%20es%20la%20menstruación?%20¿Qué%20es%20el%20ciclo%20menstrual?>

2 CUN (Clínica Universidad de Navarra), “Dismenorrea” en <https://www.cun.es/chequeos-salud/mujer/dismenorrea>

la dismenorrea primaria? Se puede considerar como el dolor asociado con la hemorragia menstrual siempre que no exista evidencia de patología orgánica pélvica. Existe otro grupo de dismenorreas, denominado dismenorrea secundaria, que hace referencia al dolor asociado con la menstruación, secundaria a una enfermedad pélvica, enfermedad orgánica como la endometriosis, los quistes de ovario, las adherencias u otras causas. En estos casos se recomienda realizar una visita al ginecólogo para su estudio y posteriormente un tratamiento. Los principales síntomas son: el dolor abdominal bajo, suele ser de tipo calambre o cólico, pero puede constituir una molestia constante e irradiarse a la zona lumbar o las piernas. El malestar puede comenzar antes de la menstruación o con ella, tiende a llegar al máximo a las 24 horas y por lo general cede después de 2 días, como máximo. A veces se expulsan moldes endometriales (dismenorrea membranosa) o coágulos. En un 50% de las mujeres se acompaña de cefalea, náuseas, estreñimiento o diarrea y polaquiuria; en ocasiones hay vómitos.

En una sociedad que se encuentra en un cambio continuo, la menstruación debería mencionarse sin ninguna restricción, pues es algo inherente al cuerpo femenino y, que en algunos casos se puede volver hasta incapacitante, es por eso que se considera que la legislación de cada país debe contemplarlo, o estar en proceso de incluirlo. La finalidad del presente artículo es generar conciencia en la sociedad para ser más empáticos y, de esta forma, causar un impacto que se vea reflejado en las diversas leyes de nuestro país.

En México no existe una regulación que hable al respecto; sin embargo, en los últimos meses, los órganos legislativos se han pronunciado, emitiendo diversas propuestas para incluir este padecimiento de las mujeres en la Ley Federal del Trabajo y así puedan gozar de este beneficio en este proceso natural del cuerpo de todas las mujeres.

Para poder entender las propuestas que se han de realizar es necesario voltear a ver a diversos países donde ya se ha regulado con éxito esta situación.

ESPAÑA

Es uno de los países pioneros en realizar el proyecto de ley que contempla una baja menstrual para mujeres que sufren menstruaciones dolorosas, sin duda un avance histórico para los derechos feministas. Asimismo, en la normativa de España señala que:

Tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis. Además, menciona que se trata de dar una regulación adecuada a esa situación patológica con el fin de eliminar cualquier obstáculo negativo en el ámbito laboral.

JAPÓN

La regulación respecto al derecho a la licencia menstrual figura en su legislación desde 1947, y las empresas no pueden obligar a una empleada a trabajar si solicita una baja por menstruación. Cabe aclarar que no hay límite en el número de días que pueden tomarse para este tipo de licencias, pero por lo general no son remuneradas.³ En un estudio del Ministerio de Trabajo japonés realizado en 2020, en 6,000 compañías el 30% de las empresas propuso reembolsar total o parcialmente estos "permisos periódicos"; sin embargo, se comprobó que sólo el 0.9% de las empleadas que reunían los requisitos, declaraban haber tomado una licencia menstrual.

COREA DEL SUR

Se permite a las empleadas tomar un día libre menstrual al mes sin que sea remunerado, si bien, las empresas que incumplen la ley estarán sujetas a una multa de 5 millones de won (4,000 dólares). Una encuesta realizada en 2018 muestra que el 19% de las trabajadoras declaran utilizar el derecho a la licencia menstrual.

3 EXPANSIÓN, "Permiso menstrual: ¿en qué países ya se aprobó y en cuáles ya se discute?", 10 de abril de 2023, en <https://expansion.mx/mundo/2023/04/10/paises-con-licencia-menstrual>

INDONESIA

En 2003 se aprobó en su legislación que las asalariadas pueden tomar uno o dos días de "vacaciones pagadas" al comienzo del ciclo menstrual, en caso de períodos dolorosos. La normativa sólo obliga a las empleadas a notificar a sus empleadores la fecha en que serán tomados los días. No obstante, la aplicación de la normativa depende de las empresas y sus trabajadoras, en la práctica muchas firmas sólo permiten un día de descanso menstrual o incluso ninguno, si deciden ignorar la ley.

TAIWÁN

También reconoce el derecho a la licencia menstrual para las empleadas de un día por mes, y con un total de tres días por año. No obstante, sigue siendo posible que las trabajadoras disfruten de más días de licencia menstrual, pero se contabilizan como días de baja por enfermedad. Los días tomados por ese concepto son pagados, al igual que las bajas por enfermedad y las medias jornadas trabajadas.

ZAMBIA

En 2015 aprobó una ley que otorga a las mujeres el derecho a una licencia menstrual que les permite tomarse un día adicional de vacaciones al mes, sin previo aviso, ni certificado médico en caso de períodos dolorosos. Conocida como el "Día de la Madre", la baja por menstruación es generalmente aceptada, pero algunos empleadores siguen siendo reticentes y piden que las mujeres den un preaviso.

MÉXICO

Como ha quedado mencionado, en nuestro país no se contempla esta situación en ninguna ley. Sin embargo, el 14 de febrero del presente año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una

propuesta de iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para que se otorguen dos días al mes con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras y personas menstruantes que presentan dismenorrea en grado incapacitante⁴, se deberá presentar certificado médico de alguna institución pública, ya sea IMSS, ISSSTE o Sistema de Salud local, que lo acredite y certifique. Esta ley, tuvo consenso por mayoría de diputados de todos los partidos representados en el Congreso local. En caso de ser emitido por un médico u hospital privado, el certificado deberá contener los datos del médico como su nombre completo y su número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la trabajadora o persona menstruante.

El 28 de febrero de 2023, la Cámara de Diputados federal recibió la propuesta de ley y se turnó a las comisiones, falta que sea discutida en el pleno y, en caso de aprobación, la publiquen en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Dicha propuesta propone adicionar los artículos 132, 133 y 169 de la Ley Federal de Trabajo, en el que las obligaciones de los patrones será hacer efectivo este derecho a todas las personas menstruantes que se vean en la necesidad de faltar a sus centros de trabajo por dicho padecimiento. Además, se dará un día al año con goce de sueldo a las mujeres para acudir a la realización de sus estudios de mastografía y papanicolaou; tratándose de los trabajadores se otorgará medio día para realizarse el examen de próstata para tal efecto, se deberá dar aviso al empleador con cinco días hábiles de anticipación.

CONCLUSIÓN

Hablar de la menstruación sigue siendo un tema prohibido, cuando en realidad es parte del proceso fisiológico de las mujeres y del cual es importante que tanto hombres, mujeres y toda aquella persona menstruante estén informados, debido a que como sociedad nos compete saber acerca del periodo menstrual. Los derechos humanos son parte fundamental de la sociedad mexicana y unas de sus princi-

4 CÁMARA DE DIPUTADOS, "Iniciativas presentadas en la LXV Legislatura turnadas a comisión", en http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/iniciativaslxv.php?com-t=51&tipo_turnot=1&edot=P

pales características es que son progresivos, es decir, que permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos.

Por otro lado, el año pasado en la Ciudad de México se arrancó el programa de Menstruación digna, en el que las alumnas de educación básica contarán con las herramientas en materia de información para vivir su ciclo menstrual sin tabús y con los insumos materiales necesarios para su cuidado. De igual manera, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres señaló que uno de los objetivos de este programa es “hablar abiertamente del proceso menstrual para así disminuir el estigma y desmontar muchos de los mitos que hay en torno

al proceso biológico de nuestros cuerpos, para naturalizar y normalizar mucho más esta conversación en torno al tema”.⁵

Finalmente, esperamos que la Cámara de Diputados federal apruebe la licencia para personas menstruantes y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Con esto se garantizará una mejor calidad de vida para todas aquellas mujeres o personas menstruantes que les impiden realizar sus actividades cotidianas; principalmente a todas aquellas personas que padecen dismenorrea incapacitante, pero, sobre todo, ser más empáticos en el tema y entender que es un problema universal y que los derechos cada día se van transformando, lo que ayudará a la sociedad mexicana a tener una vida más feliz, digna y consciente.



5 LAZO CORVERA, Paola, Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.